

**CAMILO ANDRÉS FAJARDO-GÓMEZ**

**IDENTIDADES POLÍTICAS Y LÓGICAS DE LA VIOLENCIA: EL CASO DEL SUR DE  
BOLIVAR (1997-2002)**

**PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA**  
**Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales**  
**Bogotá, enero de 2012**

**IDENTIDADES POLÍTICAS Y LÓGICAS DE LA VIOLENCIA: EL CASO DEL SUR DE  
BOLIVAR (1997-2002)**

**Trabajo de grado presentado por Camilo Andrés Fajardo Gómez, bajo la  
dirección del profesor Mauricio Romero PhD., como requisito parcial para optar  
al título de Magister en Estudios Políticos**

**PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA  
Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales  
Bogotá, enero de 2012**

## ÍNDICE

### INTRODUCCIÓN

#### **CAPITULO 1**

#### **APUNTES METODOLÓGICOS: OPORTUNIDADES POLÍTICAS Y LÓGICAS DE LA VIOLENCIA**

1.1 Construcción discursiva de la realidad e identidades políticas

1.2 Estructura de oportunidades políticas y lógicas de la violencia

1.3 La violencia coercitiva como variable externa

1.3.1 Incursión del paramilitarismo en el sur de Bolívar y Guerra Civil

1.3.2 Lógicas de la violencia y construcción de soberanía

1.4 Metodología del estudio de caso y fuentes

#### **CAPITULO 2**

#### **LOGICAS DE LA VIOLENCIA: EL TRÁNSITO DE IDENTIDADES POLITICAS**

2.1 La Construcción del Sur de Bolívar como Territorio

2.1.1 La región del Sur de Bolívar: caracterización

2.1.2 La Agenda Campesina: la tierra y los derechos humanos

2.1.3 La Agenda subversiva, FARC – ELN

2.1.4 EL Estado Paramilitar

2.2 Lógicas de la violencia, la incursión del Paramilitarismo en la región

### CONCLUSIONES

### ANEXOS

### BIBLIOGRAFIA

## INTRODUCCIÓN

El conflicto armado en Colombia, catalogado hoy día como una de las peores catástrofes humanitarias en el mundo, solo superada por los casos de Afganistán y Sri Lanka, ha sido desde hace décadas objeto de estudio por parte de distintos sectores<sup>1</sup>. Así, desde diversos enfoques se ha tratado de dilucidar el entramado de causas que lo han originado, sus actores, sus consecuencias económicas, políticas y sociales, así como las condiciones necesarias que han de darse para darle término a este. Sin embargo, la complejidad del conflicto que padece el país se ha pasado por alto cuando se ha tendido a victimizar a la población civil, otorgándole de esa manera cierta pasividad en las dinámicas conflictivas que se han desarrollado en las distintas regiones, ignorando así las oportunidades políticas en las que se encuentra sumergida pero con las cuales también interactúa agenciando su propia identidad, e incluso otras nuevas oportunidades (Tarrow, 1997). Se victimiza a la población, ignorando casi siempre que en ella reside el campo de batalla en el cual los ejércitos se debaten el botín político de la guerra que no es otro sino la lealtad. O por otra parte, en el peor de los casos, se ha concebido a la población desde cierto a priori sociológico, “imputándoles a los individuos o actores colectivos atributos o comportamientos derivados del grado de desarrollo o de la categoría social a la que pertenecen” (Romero, 2003, p.163). Caracterización que Bolívar (2006) ha denominado *teoría de la atribución causal*, y que consiste en la creencia de que “existe un fuerte nexo entre el actor y el acto, al punto de que se afirma que los actos están imbuidos de las características de la persona a la que se le atribuyen” (p.388). Algo así como atribuir un conjunto de comportamientos e intereses *apriori* a campesinos, y otros distintos a insurgentes, que por supuesto serán radicalmente opuestos a los de los paramilitares. Así las cosas, las víctimas del conflicto colombiano han sido ignoradas desde el análisis político, para simplemente tratarlas desde la perspectiva humanitaria, que por supuesto no es nada desdeñable.

---

<sup>1</sup> Señala Mauricio García Durán: “los años más difíciles de esta guerra contra la sociedad se dieron en

Efectivamente la victimización a la que hemos aludido no es una ficción, los altos índices de violaciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) en el conflicto armado interno son una realidad, la población civil ha sido y es la principal víctima de la guerra. Faltaba más que ignorásemos esta realidad. Al tratarse el conflicto colombiano de una guerra irregular, en la cual confluyen redes de actores estatales y no estatales, y en la cual no abundan las batallas entre ejércitos y la violencia se dirige mayoritariamente contra la población civil, conflictos que Kaldor (2010) ha denominado bajo la expresión “nuevas guerras”, hay razones suficientes para generar la victimización que hemos señalado. Sin embargo, a pesar de que la violencia contra la población civil debe ser reprobada desde cualquier punto de vista, un estudio teórico de la violencia y su impacto en la identidad política de la población, como el que pretendemos emprender, se encuentra lejos del discurso descriptivo que desde una perspectiva normativa tiene como objetivo una condena de las acciones violentas. Así mismo, el hecho de resaltar las experiencias de muerte y destrucción por las que atraviesa la población no trae consigo una mayor claridad analítica, simplemente victimiza (Bolívar, 2006).

Más allá de las víctimas que producen los actores armados al interior del conflicto, las dinámicas violentas que se implementan tienen un valor político que es susceptible de ser analizado no solo desde la perspectiva de la ocupación del territorio por parte de un ejército en particular. Cuando la violencia se usa para controlar a la población ella es más un recurso más que un producto final. En términos de Tarrow podría concebirse como “un recurso exterior” que puede estimular como desestimular la movilización de la población civil (1997, p.49), configurar la identidad política de la población, y en ese sentido resulta significativo “distinguir analíticamente entre las víctimas y los verdaderos blancos de la violencia” (Kalyvas, 2010, p.47). Las dinámicas armadas se ejecutan muchas veces con la finalidad de establecer redes y filiaciones con la población civil a través de mecanismos coercitivos, dinámicas que buscan reconfigurar las lealtades de los pobladores y así las relaciones de poder.

Por otra parte, estudiosos del conflicto en Colombia han obviado el papel activo que tiene la población civil cuando han tendido a ver el conflicto ya sea como una “guerra contra la sociedad” (Pécaut, 2001), o han descartado la comprensión del conflicto colombiano como una “guerra civil”, fundados en el argumento de que ni la guerrilla, ni los grupos paramilitares, cuentan con un apoyo sustancial de la población (Pizarro, 2004). Ciertamente todo conflicto armado interno es explícitamente una guerra contra la sociedad; los civiles son las principales víctimas. Como lo señalamos ya, las guerras internas al ser completamente irregulares vinculan a la población civil dentro de su poder devastador. No obstante, al definir el conflicto interno como una “guerra contra la sociedad”, se hace un énfasis explícito en el grado de victimización que se alcanza sobre la población, restando de esa manera valor estratégico y político a las distintas dinámicas violentas. Pero las acciones violentas son susceptibles de tener un valor político en tanto pretenden redefinir el orden social o mantener el *statu quo*. En ese sentido las víctimas aniquiladas no son los únicos efectos de las dinámicas de violencia, pues estas también impactan y modelan las preferencias políticas de la población: “la identidad política, más que una causa estable de la acción colectiva, sería un resultado, un proceso cambiante de la interacción entre actores que compiten por el poder, recursos y por dar un significado a la realidad” (Romero, 1998, p.76). La víctima modela las preferencias políticas de la población, en tanto esta última puede llegar a concebirse como una posible víctima de acciones futuras. En síntesis, la población no es solo víctima de los actores armados, pues en medio del conflicto ella entra en un cálculo de intereses en el cual configura sus preferencias. La población, si bien no apoya a los distintos grupos armados de manera expresa, responde ante las distintas dinámicas coercitivas de violencia militando de manera casi refleja, sin que ello implique necesariamente una percepción subjetiva de pertenencia a ninguno de los actores armados (Kalyvas, 2010, p.36).

Por otra parte, análisis del conflicto que hacen un énfasis en la “guerra contra la sociedad”, o en la debilidad del monopolio de la violencia por parte del Estado, son

presas de categorías dominantes en el análisis del conflicto. Obvian de esa manera que el monopolio de la violencia no es un atributo del Estado, sino una pretensión estatal en disputa. Qué el conflicto armado no es una anomalía de la política, entendida esta como una actividad pacífica fundada en el discurrir de los razonamientos que busca allanar consensos, sino una práctica eminentemente política que busca redefinir los confines de lo político en sí mismo, así como de los actores que tienen derecho a hacer política (Bolívar, 2006).

Teniendo en cuenta entonces las aproximaciones metodológicas que hemos esbozado para el análisis del conflicto armado en Colombia, sobre todo del papel que juega la población civil en él, así como otras que señalaremos de manera más específica posteriormente, este estudio se aproxima a la realidad conflictiva del Sur de Bolívar. Contexto en el cual al final de la década del noventa surgió en la población una radical oposición a las negociaciones de paz entre el Gobierno y el ELN por parte de una movilización civil. Dicha región ha sido escenario de la disputa social, política y armada que han emprendido el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y distintas organizaciones paramilitares y de autodefensa, en conjunto con una multiplicidad de movimientos sociales desde las últimas dos décadas del siglo XX. Entre estos movimientos sociales la Asociación Civil para la Paz (ASOCIPAZ) implementó desde 1999 hasta el 2001 una serie de movilizaciones en oposición a la creación de una zona de concertación en la región entre el ELN, la Sociedad civil y el gobierno Pastrana, en vista de un eventual proceso de paz. Lo paradójico de esta situación es que dichas movilizaciones expresaron una recomposición de las lealtades políticas en la región, como señala Omar Gutiérrez: “un cambio drástico en las relaciones entre ciertos sectores sociales y políticos y los grupos armados ilegales” (2004, p.35). Efectivamente, la creación de ASOCIPAZ, y el eventual apoyo de diversos sectores de la sociedad a sus propósitos, expresó un tránsito en las identidades políticas de la población; un quiebre de las alianzas que históricamente habían forjado el ELN en la región, y un nuevo pacto con el paramilitarismo que impulsado por las AUC a penas incursionaba en el territorio.

En efecto, el ELN en las últimas décadas había sentado fuertes bases sociales en el sur de Bolívar, constituyendo así la serranía de San Lucas como un fortín de similar importancia a lo que fue *La Uribe* para las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). En un momento fue tal la hegemonía del ELN en la región que su influencia tuvo alcances políticos sobre alcaldes y la gobernabilidad local, y en no pocas oportunidades la población, así como distintos movimientos sociales, fue simpatizante con las ideas de este grupo insurgente. Ahora bien, aunque es a penas obvio que en dicho proceso de recomposición de las relaciones de poder en la región jugó un papel fundamental el ejercicio de violencia impulsado por los ejércitos paramilitares desde 1997, se ha tendido a marginalizar el estudio de las dinámicas de coerción en el proceso social y político que hemos señalado. Es decir, en los diversos estudios que se han desarrollado en torno a la oposición regional a la zona de concertación en el sur de Bolívar, se ha resaltado en una perspectiva *macro* el papel de los actores estatales y no estatales, “el reino de las élites, las ideologías y la gran política”, en palabras de Kalyvas (2010, p.25). En ese sentido, estudios como el de Gutiérrez, a pesar de que reconocen la importancia de las lógicas de la violencia desarrolladas por los actores armados, pues afirma, *v.g.* “al mismo tiempo, en este panorama, los grupos paramilitares hicieron aparición y cumplieron un papel fundamental” (2004, p.35), no logran clarificar del todo el tipo así como el grado de consecuencias que tuvieron las distintas dinámicas de violencia sobre la población civil y sus preferencias políticas.

Haciendo un énfasis en el enfoque analítico que Kalyvas denomina críticamente como “la Gran política”, Gutiérrez resalta dentro de las causas que crearon la radical oposición a la zona de concertación por parte de ASOCIPAZ, el papel que cumplieron los intereses de las nuevas élites cocaleras de la región, los planes de inversión de las distintas agencias de cooperación internacional, el fracaso de las negociaciones del Cagüán, y hasta el interés de las élites políticas por integrarse al resto del departamento, entre otras. Como se evidencia, causas que si bien fueron un estímulo

en tanto transformaron la estructura política de la región, y en ese sentido se constituyeron en una oportunidad para esta movilización anti insurgente, no logran allanar el impacto que cumplió la violencia implementada por las AUC en las preferencias políticas de los pobladores llanos; campesinos, asalariados y cocaleros que antaño habían establecido una suerte de alianza con la insurgencia. O máximo, tienden a mostrar a los marchistas como objetos útiles de unos intereses hegemónicos, como si existiera una división tajante entre categorías como consenso y coerción. Presumen que las decisiones políticas en las altas esferas sociales inmediatamente configuran la identidad política de los pobladores. Se trata de estudios que desde la esfera de los liderazgos de los grandes protagonistas, dejan de lado el análisis de las dinámicas de violencia que modelan las preferencias y comportamientos de la población llana. Es decir, no existe una explicación que de cuenta del por qué en determinado momento se establece como hegemónica la agenda antsubversiva de un sector específico de la sociedad, en detrimento de las agendas contestatarias que habían defendido campesinos y asalariados de la región. Es por esto que, a pesar de que estudios como el de Gutiérrez logran dar cuenta de la transformación en las relaciones de poder en la región, evidenciando un mayor peso en términos políticos de las nuevas elites de la región, conformadas por ganaderos, comerciantes, transportadores, medianos y grandes cultivadores de coca, los principales protagonistas de ASOCIPAZ, no logran explicar como el resto de la población sometió sus preferencias a los fines que persiguió dicha organización que se oponía a la conformación de la zona de concertación. Entonces nos preguntamos: ¿qué causó en la población una radical oposición a la insurgencia teniendo en cuenta las alianzas y lealtades que históricamente se habían forjado con ella? ¿Qué papel tuvieron en dicha recomposición de lealtades las distintas dinámicas de violencia implementadas tanto por las AUC como el ELN? ¿Son las lealtades e identidades causa de los conflictos armados o resultantes de ellos? ¿Es la violencia una anomalía de la política o una práctica eminentemente política que determina los confines del espacio político mismo?

En ese sentido, la necesidad del presente estudio se deriva de la importancia de entender la violencia como un concepto autónomo que es susceptible de ser analizado dadas sus variadas implicaciones políticas. Es decir, a pesar de que es apenas obvio que la violencia tiene un valor político, este no se puede obviar en todas sus implicaciones. Efectivamente no se puede dejar de lado el impacto social y político del ejercicio de la violencia desarrollado por las AUC, que desde 1997 incursionaron en municipios como Yondó, Rioviejo y Tisquisio, persiguiendo a alcaldes y concejales que tenían aparentemente alguna relación con la insurgencia. O entender, de una manera simplificada, que el impacto de las muertes selectivas o las masacres implementadas por el paramilitarismo tienen como única consecuencia las víctimas mortales de tales sucesos. Así como tampoco obviar analíticamente la respuesta de la insurgencia a través de la intimidación de la clase política de Santa Rosa del Sur y Simití, poblaciones que en medio del conflicto se concibieron como potenciales aliadas del paramilitarismo<sup>2</sup>. Es decir, pretendemos en este estudio resaltar la necesidad de emprender un análisis de las dinámicas o de las lógicas de la violencia que implementaron las AUC y el ELN en el sur de Bolívar, para así llegar a afirmar que las dinámicas violentas que implementó el paramilitarismo en la región resultaron ser exitosas no solo en la efectiva expulsión de la insurgencia de la región, o mejor en su confinamiento, sino en la modificación y apropiación de las lealtades de los ciudadanos a través del ejercicio de un poder soberano impulsado a través de la violencia.

Es decir, adoptando una comprensión del conflicto armado en el Sur de Bolívar como una “Guerra Civil”, entenderemos que el combate y el ejercicio de la violencia se da no solo en función de la ocupación territorial, sino principalmente en la institución de un poder soberano que se respalda en las identidades y preferencias de la población que le es afable (Kalyvas, 2010). Así, afirmaremos que la consolidación de las AUC en el Sur de Bolívar son como tal las movilizaciones ciudadanas entre 1999 y 2001, eventos en los cuales el paramilitarismo exhibe el poder alcanzado sobre la población a través

---

<sup>2</sup> Ver Anexo1. La dinámica del conflicto, a partir de 1997, año de incursión de las AUC, tiene un componente eminentemente territorial que esperamos explotar a partir de la teoría de las lógicas de la violencia desarrollada por Kalyvas, como lo explicaremos más adelante.

del ejercicio estratégico que realizan de la violencia. Luego, nuestro análisis confirmará la tesis de que las identidades no preexisten y son causantes necesariamente de los conflictos, más bien los conflictos armados internos generados ante la ausencia de un poder soberano constituyen esas identidades y las varían a partir de distintas dinámicas de violencia. Las marchas en el sur de Bolívar y las transformaciones en sus discursos y repertorios evidencian un cambio en la articulación entre los poderes regionales: “las lealtades pueden ser endógenas a la guerra y el control militar de una localidad puede tener como consecuencia la colaboración popular” (Kalyvas, 2010, p.17).

En vista del objetivo que hemos señalado, el enfoque que hemos adoptado en este estudio se encuentra a medio camino de la teoría de la acción colectiva y los movimientos sociales desarrollada por Sidney Tarrow (1997), y la lógica de la violencia en la guerra civil de Stathis Kalyvas (2010). Efectivamente la teoría de Tarrow insiste en la importancia de entender las movilizaciones sociales en el marco de las oportunidades políticas, y no desde los agravios a los que contesta la movilización. Es decir, a pesar de que identificamos en el Magdalena Medio, y concretamente en el sur de Bolívar, toda una historia de demandas sociales y económicas, comprenderemos el origen de las movilizaciones ciudadanas desde los recursos estatales y no estatales que existen de manera externa a los distintos movimientos, y de esa manera promueven la expresión colectiva de dichas demandas en un determinado momento. Es decir, explorando la estructura de oportunidades políticas antes de 1997, año de incursión de las AUC en la región, podremos justificar la presencia histórica de movimientos ciudadanos con inspiración contestataria, como los movimientos campesinos y obreros, gracias a la presencia de asociaciones sindicales y a la presencia histórica de repertorios políticos de izquierda en la región, así como de grupos armados insurgentes. En esa dirección, también indagaremos las transformaciones que sucedieron en el entorno social, después de la incursión paramilitar, de tal manera que se creara un ambiente propicio para el movimiento de oposición a la zona de concertación con el ELN. No obstante, si bien señalaremos que

hay evidentes transformaciones en la estructura de oportunidades políticas, y estas se visibilizaron en el apoyo que surgió a la movilización de ASOCIPAZ; la emergencia de una clase social aliada al narcotráfico, el fracaso de las conversaciones entre el gobierno y las FARC en el Caguán, sostendremos que el principal recurso externo que explica la crisis de las movilizaciones contestatarias y la consolidación de ASOCIPAZ, son las acciones violentas impulsadas por el paramilitarismo. En esa dirección, señalaremos que es fundamental atender las lógicas de la violencia esbozadas por Kalyvas, como recurso político externo, para entender como las distintas dinámicas violentas impulsadas por los actores armados pueden llegar a modificar las lealtades políticas de la ciudadanía. En este caso la violencia coercitiva impulsada por el paramilitarismo en su consolidación en la región.

El primer capítulo de este trabajo se ocupará de elaborar el marco teórico, así como de definir a partir de distintos conceptos las categorías y variables que nos serán útiles para la aprehensión y análisis de nuestro objeto de estudio. Con este propósito, elaboraremos inicialmente una aproximación a la región del sur de Bolívar a partir de la noción de “región en construcción”: sujeta al quehacer de los actores sociales que allí interactúan conflictivamente ante el vacío estatal (Madariaga, 2006). En ese sentido, resaltaremos la importancia de la categoría de “agenda”, lo cual nos llevará a entender el conflicto social, político y armado en la región, como la disputa entre la hegemonía y la subalternidad entre distintas agendas que compiten entre sí. Seguidamente, a partir de una apropiación de la teoría de los movimientos sociales elaborada por Sidney Tarrow, justificaremos que la emergencia y posterior hegemonía de una agenda contra insurgente como la exhibida por ASOCIPAZ, solo fue posible en el marco de una transformación de la estructura de oportunidades políticas de la región, en declive de otras agendas contestatarias que históricamente se habían desarrollado. Sin embargo, y teniendo en cuenta la importancia de la confrontación armada en el contexto social y político de la región, argumentaremos la necesidad de implementar un análisis de las lógicas de la violencia implementadas por los actores armados, en tanto la violencia como recurso externo puede incentivar como cohibir la movilización ciudadana a partir

de la modificación de las lealtades de la población, su control político. Por lo tanto, apropiándonos de los conceptos principales de la teoría desarrollada por Kalyvas, “La lógica de la violencia en la guerra civil”, esperamos implementar metodológicamente un análisis que de cuenta de cómo el avance estratégico de las AUC incidió paulatinamente en la emergencia de la agenda de ASOCIPAZ, en detrimento de las agendas contestatarias que otros movimientos sociales habían expresado antes de la incursión del paramilitarismo en 1997.

En vista del desarrollo del razonamiento de este trabajo: que la emergencia de una agenda política anti insurgente, como la exhibida por ASOCIPAZ, solo fue posible gracias al uso coercitivo de la violencia que redundó en la modificación de las lealtades políticas de los pobladores, este capítulo se desarrollará en varios momentos. Inicialmente, y a partir de la categoría de agenda, contextualizaremos a los distintos actores sociales y políticos que se disputan la construcción de la región antes de la incursión del paramilitarismo en 1997. Nuestro propósito será establecer una suerte de línea de base que nos permita establecer qué tipo de movimientos sociales existían en la región antes de 1997, cuál era el fundamento de su discurso, así como el grado de incidencia que tenían en la región a través de las movilizaciones que protagonizaban. Posteriormente, y a partir de un análisis del avance progresivo del paramilitarismo, a partir del uso coercitivo de la violencia, pretenderemos justificar el declive progresivo de las agendas contestatarias de los distintos movimientos, para la posterior institución de una agenda contra insurgente como la exhibida por ASOCIPAZ. Todo ello entendiendo entonces que el ejercicio de la violencia desarrollado por las AUC persigue el control o el gobierno de la población, y en ese sentido es un factor represivo dentro de la estructura de oportunidades políticas. Luego, si entendemos la identidad política como el resultado de la interacción entre diversos actores que compiten por el poder, señalaremos que este campo relacional se afectó drásticamente gracias a las dinámicas de violencia impulsadas por el paramilitarismo en la región, silenciando de esa manera unas agendas contestatarias impulsadas desde la comunidad para privilegiar otras afables a su proyecto político.

Este trabajo al pretender un enfoque eminentemente analítico alimentó su reflexión de distintos textos o fuentes secundarias relevantes para nuestro propósito. Evidentemente cualquier investigación futura que pretenda obtener datos de primera mano debe acercarse a los pobladores de la región como principales protagonistas de los eventos que analizamos. No obstante, entendemos que nuestro trabajo analítico tiene un valor preliminar a cualquier investigación de campo, en tanto determina teóricamente y en confrontación con fuentes secundarias, la problemática de que nos ocupamos.

## CAPITULO 1

### **APUNTES METODOLÓGICOS: REGIÓN EN CONSTRUCCIÓN, OPORTUNIDADES POLÍTICAS Y LÓGICAS DE LA VIOLENCIA**

En vista que nos hemos propuesto explicar el tránsito de identidades políticas que aconteció en el sur de Bolívar a finales del siglo pasado, y que se visibilizó fuertemente en la configuración del movimiento social contrainsurgente ASOCIPAZ, este capítulo explora los conceptos que nos permitirán entender el proceso político así como las dinámicas de violencia que promovieron el surgimiento de dicha movilización; en síntesis el carácter endógeno al conflicto de las identidades políticas de la región. Con este objeto, exploraremos los conceptos elaborados desde la teoría de los movimientos sociales, para así establecer el marco teórico que nos permitirá aprehender el origen de esta movilización anti insurgente una vez se transforma la estructura de oportunidades políticas en términos de una transformación de las lógicas de la violencia. En ese sentido, en la medida que pretendemos demostrar como este ambiente político se verá drásticamente afectado una vez se da la incursión paramilitar en la región en 1997, haremos explícitos los conceptos que desde la teoría de las lógicas de la violencia nos permitirán aprehender el impacto político de dichas acciones violentas.

#### **1.1 Construcción Discursiva de la Realidad e identidades políticas**

La idea de que la ausencia estatal, o su débil presencia, funciona como catalizador de los distintos conflictos sociales y armados, se ha vuelto un lugar común en los distintos estudios sobre la conflictiva realidad colombiana<sup>3</sup>. Efectivamente, la importancia hegemónica que ha jugado el rol del Estado en la teoría política occidental ha guiado este tipo de enfoques interpretativos, absolutamente hobbesianos por supuesto, sobre

---

<sup>3</sup> Eduardo Pizarro (1996, 16) ha criticado fuertemente este enfoque por su carácter tautológico, pues la debilidad del Estado se percibe a la vez como causa y efecto: existe la insurgencia porque el Estado es débil, el Estado es débil porque existe la insurgencia.

todo si se asume que la politización de una realidad específica se desarrolla a partir de la presencia del Estado y sus instituciones. Ahora, si adoptamos como objeto de estudio la región del Magdalena Medio y concretamente el Sur de Bolívar, ese podría ser nuestro enfoque investigativo si se tiene en cuenta que como región se ha constituido a partir de una débil presencia estatal y una alta conflictividad social y política. Entendiendo en esa dirección la presencia del Estado como institución política por excelencia que ejerce de manera soberana el monopolio de la violencia en todo el territorio, así como regula las relaciones entre sus habitantes por medio de la institucionalización de la justicia, administrando así la vida de los ciudadanos a través de la ley y sus instituciones (Naef, 2005), no solo no se ha hecho realidad en el Sur de Bolívar sino en innumerables regiones del país. En ese sentido, la concepción que adoptaríamos en este estudio de la realidad política y social de la región del Sur de Bolívar estaría guiada por el concepto de estatalización. Y así, si dependiendo del concepto que tengamos de la realidad depende el método investigativo que adoptamos, el camino a seguir sería una determinación objetiva que establezca el grado y tipo de presencia que el Estado tiene en la región.

No obstante, como ha señalado Bolívar (2006, p.383), la situación de la investigación histórica sobre el proceso de formación del Estado colombiano y, en ella, de la historia de las instituciones de control y regulación política, nos impide establecer con precisión el grado de dominación estatal en cada una de las regiones. En consecuencia, interpretar la realidad conflictiva del sur de Bolívar desde el marco conceptual que sugiere una débil o ausente presencia estatal nos puede llevar a imprecisiones o estudios incompletos. Así, resultaría una tarea inacabable adoptar este enfoque, sobre todo si pretendemos determinar el grado de estatalización de la realidad de una región, y mucho más si se piensa justificar o analizar desde ahí la existencia de un conflicto social y armado.

Coincidimos entonces con Sandoval (1996) en la idea de que dependiendo de la concepción que tengamos de la realidad dependerá el enfoque investigativo que

adoptemos. En esa dirección no abandonamos la idea de que la frágil o ausente construcción del Estado se evidencia contundentemente en el Magdalena Medio, pero también en el resto del país. Colombia es un país que dada su geografía sumamente compleja tiene una considerable fragmentación de su territorio, lo cual llevó a que históricamente no se privilegiara el establecimiento de un poder hegemónico a nivel nacional. Al estar el territorio nacional atravesado por tres cordilleras, así como múltiples altiplanos entre los cuales encontramos valles de clima tropical, históricamente las dificultades de comunicación han favorecido la conformación de regiones relativamente separadas, razón por la cual a la fragmentación del territorio le corresponderá históricamente una fragmentación de la nación. Esta observación geográfica es importante en tanto la ocupación del territorio colombiano también se ha desarrollado de manera progresiva, razón por la cual constantemente las fronteras de colonización u ocupación del territorio se han ido trasladando y a la vez han sido escenario del conflicto social y armado. Ese es el caso del Magdalena Medio, y de manera particular del Sur de Bolívar, pues, como señala Daniel Pécaut (2008), la región se erigió como zona fronteriza de manera tardía, pues dadas las difíciles condiciones geográficas del país la población se concentró rápidamente en polos urbanos, dejando solo hasta la década del sesenta su proceso de poblamiento. Así, como región “es un espacio en proceso continuo de construcción; es un escenario de fronteras móviles dentro del cual la delimitación de su territorio está sujeta al quehacer histórico de los actores sociales que allí se expresan” (Madariaga, 2006, p.39). Ya sea desde las oleadas colonizadoras iniciadas en la época de la conquista, pasando por las dinámicas de ocupación impulsadas por la explotación petrolera de la región, hasta las colonizaciones forzadas que impulsó la violencia partidista de los cincuenta, en conjunto con las oleadas migratorias desatadas por el conflicto armado reciente, así como el auge de los cultivos ilícitos en la región. Procesos paulatinos de ocupación del territorio que han estado acompañados por una multiplicidad de conflictos sociales, políticos, económicos y culturales, entre los que sobresalen la presencia de actores armados, la lucha por la tierra, así como la apropiación de los recursos naturales de la región, particularmente el petróleo y el oro. Insistimos, se trata entonces de una **región**

**en construcción** sujeta a las dinámicas de los actores sociales, políticos y armados que allí interactúan: desde las consideraciones militares que en los cincuenta concebían en sus discursos la región como “zona roja”, zona de especial alteración del orden público, de violencia y presencia subversiva, hasta los imaginarios que impulsados por sectores agroindustriales, cocaleros y comerciantes, la concebían a final del siglo XX como foco de progreso y desarrollo para el país.

Ahora bien, en la medida que nos hemos propuesto hacer explícitas las condiciones que propiciaron el tránsito de identidades que aconteció a finales del siglo XX en el sur de Bolívar: de las movilizaciones campesinas que perseguían una agenda reivindicativa, a la génesis de ASOCIPAZ, movilización que al oponerse a la zona de concertación persiguió un objetivo contra insurgente, el enfoque que adoptaremos tendrá como punto de partida la idea de que la región se encuentra en construcción, y en ese sentido sujeta al que hacer de los actores sociales, políticos y armados que allí interactúan. Esto significa que en vez de entender el conflicto desde la ausencia o debilidad estatal, enfoque investigativo que como ya lo enunciamos es inviable, adoptaremos la idea de que la región y su realidad conflictiva se puede interpretar a partir de la perspectiva que reconoce la existencia conflictiva entre múltiples y contradictorias **agendas**. Estas últimas impulsadas por variados actores sociales que se disputan el papel hegemónico en la construcción de la región, o luchan por no ser relegados a una posición subalterna. En este caso entendemos por agenda, como lo ha sugerido Teófilo Vásquez:

“el conjunto de repertorios de acción que se plasman en programas, proyectos, discursos y acciones, que los actores políticos, sociales y armados despliegan con el objetivo de encuadrar a los pobladores en lo que estos actores consideran que debe ser el futuro deseable de las localidades y la región en el marco de un proyecto político y económico del orden nacional” (2006, p.315)

Luego, concebiremos la región del sur de Bolívar como un escenario de conflicto entre diversas agendas políticas, sociales y armadas. Agendas no solo impulsadas por grupos armados y movimientos sociales de diferentes tipos, sino también por gremios comerciales y agencias estatales e internacionales que inciden en la dinámica interna

de la región. En síntesis, concebimos la realidad del Sur de Bolívar como una **región en construcción**, sujeta a la disputa política y armada entre diversas **agendas**.

Ahora bien, a pesar de que nuestro punto de partida señala la emergencia de un nuevo movimiento social o actor social en la región, de ninguna manera nuestro enfoque se centra en el análisis de los movimientos sociales. Un análisis completo de los distintos actores sociales que operan en la región no solo se encuentra fuera de los límites de este trabajo, sino que a la vez resulta una empresa compleja en tanto no hay suficientes fuentes disponibles que nos permitan dar cuenta de ello. Así mismo, un estudio detallado sobre el origen de los distintos movimientos, así como sobre los modos en que articulan su acción, o como se relacionan entre sí, e incluso con la sociedad misma, demanda por su extensión casi un estudio separado para cada movimiento. Sin embargo, sin dejar de reconocer la diversidad existente que puede establecerse entre los distintos actores colectivos, la diversidad de fines que persiguen, los modos a través de los cuales llenan de sentido a esa actividad de estar juntos, identificamos también que en la configuración de las movilizaciones colectivas la identidad grupal se constituye como un vector común que da cohesión a la movilización. Se trata entonces de una categoría sociológica que como herramienta analítica, y muy cercano a la categoría de **agenda**, será central en esta investigación, en tanto ella nos permite comprender uno de los factores que explicaría la configuración de los distintos movimientos sociales.

Ahora bien, esta apuesta investigativa ya enmarca una decisión metodológica. La identidad colectiva como herramienta analítica sin duda tiene efectos sobre el tipo de fuentes de los cuales haremos uso en esta investigación. Si entendemos por identidad colectiva:

“la conexión cognitiva, moral y emocional de un individuo con una comunidad más amplia, categoría, práctica o institución. Es la percepción de un status o relación compartida, que puede ser imaginada más que experimentada directamente, y es distinta de las identidades personales, aunque puede formar parte de una identidad personal. Una identidad colectiva puede haber sido construida primero por personas que no hacen parte de un grupo, quienes

pueden luchar por ser aceptados. Las identidades colectivas se expresan en materiales culturales – nombres, narrativas, símbolos, estilos verbales, rituales, ropa, entre otros- pero no todos los materiales culturales expresan identidades colectivas” (Rodríguez, 2009, p. 268).

de ninguna manera ella posee una existencia real y objetiva que pueda ser aprehendida positivamente. En esa dirección, a pesar de que dicha identidad pueda ser rastreable por parte del investigador en una multiplicidad de materiales culturales, adoptando un ejercicio hermenéutico de investigación, realizable a través de entrevistas, trabajos grupales, etnografías, etc., las fuentes de las cuales pretendemos valernos giran en torno a los discursos y concepciones que elaboran los distintos movimientos acerca de sí mismos y de la realidad en la que interactúan: en síntesis, sus **agendas**; apuesta investigativa que Bolívar (2009) ha denominado una vuelta al mundo del actor. En ese sentido, lejos de la pretensión de aprehender la realidad de manera objetiva, nos acercaremos a la realidad intersubjetiva que, construida discursivamente en cada uno de los distintos actores sociales, se expresa a partir de las narrativas y acciones en donde se conciben a sí mismos para exponerse al público, plasmando de esa manera su propia identidad y agenciando a la vez el territorio que habitan y en el que interactúan.

Por las razones antes expuestas, así como por la dificultad de disponer de datos que permitan una aprehensión más íntima de los distintos movimientos y actores sociales que analizaremos, sobre todo el caso de ASOCIPAZ, este trabajo se concentrará en el conjunto de expresiones o declaraciones que públicamente en los diferentes medios elaboran los movimientos acerca de ellos mismos, de su lucha, de su comprensión de la realidad política en la que actúan, etc. Se tratará de una vuelta a los imaginarios políticos que elaboran y difunden públicamente los distintos movimientos acerca de sí mismos, del espacio político relacional en el que luchan, agenciándose a sí mismos y a la realidad que habitan: una construcción discursiva de la realidad.

Para la realización de este propósito nos valdremos no solo de los archivos de prensa

local y nacional que hacen referencia a las distintas movilizaciones ciudadanas durante las últimas décadas del siglo XX en la región, sino también de la base de datos y algunas publicaciones del Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP) en lo que respecta a movimientos sociales.

## **1.2 Estructura de Oportunidades Políticas y lógicas de la violencia**

Es indudable el grado de influencia que tienen los distintos movimientos sociales en los sistemas políticos. Cuando los ciudadanos unen sus fuerzas y se movilizan en pro de causas muy variadas, impactan las realidades sociales introduciendo innovaciones altamente significativas en sus entornos, o suscitan respuestas a su actuar que se traducen posteriormente en distintos conflictos. Ese es el caso de la movilización civil invocada por ASOCIPAZ, pues a partir del bloqueo de las principales vías del noroccidente del país por parte de miles de ciudadanos lograron, en un diálogo sostenido con el gobierno central, impedir la creación de la zona de concertación con el ELN.

Ahora bien, si entendemos los movimientos como acciones colectivas planteadas por personas que comparten objetivos en común, y en ese sentido mantienen una acción solidaria entre sí en pro de lo que llamaríamos una acción contenciosa, no es del todo clara la razón que se encuentra en la génesis de estos grupos. ¿Qué razones llevaron a la asociación y posterior movilización de los miembros de ASOCIPAZ? Para las ciencias sociales siempre ha existido una gran incógnita respecto al paso que se gesta en los distintos movimientos entre la realidad individual de cada persona y la asociación que se visibiliza en el movimiento social, generando una solidaridad común en pro de un objetivo compartido. Como señala Tarrow (1997), las distintas tradiciones académicas se han debatido en torno a esta cuestión.

A pesar de que siempre han existido en la historia movilizaciones sociales, no es claro por qué los individuos en situaciones específicas actúan en común en pro de diversas

reivindicaciones u objetivos. Mientras la tradición teórica del individualismo norteamericano, buscando dar cuenta de los movimientos sociales, indagó por los recursos internos de actores y movimientos que posibilitaban la movilización, el “cómo” de los movimientos según Tarrow, y visible en las estrategias de movilización y convocatoria al interior de los distintos movimientos, el estructuralismo europeo estudió el “por qué”, allanando así posibles razones en las estructuras de los estados y las sociedades. No obstante, a pesar de lo significativos que llegaron a ser estos estudios, no se lograba explicar por qué ciertas variables que se identificaban no tenían el mismo efecto movilizador en unos contextos como en otros; por qué la gente se moviliza en ciertos períodos históricos específicos y no en cualquier momento.

Efectivamente, el abandono por parte del Estado colombiano, así como la existencia de múltiples demandas sociales, en conjunto con la presencia de diversas asociaciones civiles que fungen como base de los distintos movimientos, son un factor común que se reproduce en diversas regiones del país. Sin embargo, con dificultad puede existir otra región en Colombia en donde la lucha y la movilización social ha tenido tanto auge durante la segunda mitad del siglo XX como en el Magdalena Medio, y concretamente en el Sur de Bolívar, subregión que nos ocupa<sup>4</sup>. Si el auge del movimiento social simplemente se explicara desde la existencia de carencias económicas, sociales o políticas, habría que explicar por qué múltiples movimientos sociales se generaron a lo largo del siglo XX en el Magdalena Medio y no en regiones del sur del país que también padecen el mismo nivel de carencias, o a veces uno mayor. En síntesis, en otras regiones también existen niveles altísimos de demandas y agravios sociales, en conjunto con asociaciones civiles que podrían facilitar la movilización ciudadana, sin embargo, no en todas las regiones la movilización se hace efectiva. Y no en todas las regiones se dieron las transformaciones políticas necesarias para la fundación de un movimiento contra insurgente como lo fue ASOCIPAZ. Luego, parecería inexacto atribuir la movilización social a causas internas

---

<sup>4</sup> “En el lapso 1990-2001 la subregión del Sur de Bolívar participó en el 43% de las protestas campesinas del conjunto regional. San pablo es el municipio que registra el mayor número de protestas del periodo y el Magdalena Medio, con un promedio de tres al año” (Prada, 2006, 182).

de los distintos movimientos, como el nivel de organización, o atribuirla a la estructura o al nivel de agravios como origen de la protesta contestataria.

De ninguna manera la movilización ciudadana es proporcional al nivel de agravios que existe en una sociedad. Si en el pasado se llegó a pensar que la movilización ciudadana estaba asociada a la miseria y a toda una conjunción de privaciones de carácter social, para los setentas en Europa y Estados Unidos surgieron movimientos más asociados a la abundancia y al bienestar que ponían en entre dicho las hipótesis pasadas. A pesar de que puede llegar a pensarse que la causa principal que incita a la acción colectiva reside en el nivel de agravios que puede existir al interior de una sociedad, el “por qué”, han habido periodos en la historia de las sociedades en los cuales a pesar de que existen causas objetivas de explotación, o que aparentemente incitarían a la creación de una agenda contestataria, no hay una relación causal entre el nivel de agravios y la movilización ciudadana:

“las explosiones de acción colectiva no pueden atribuirse a la necesidad de la gente ni a la desorganización de sus sociedades. Estas *condiciones previas son más constantes que los movimientos* que supuestamente generan. Lo que varía ampliamente con el tiempo y el lugar son las *oportunidades políticas*, y los movimientos sociales están íntimamente relacionados con los incentivos que estas ofrecen para la acción colectiva que con las estructuras sociales o económicas subyacentes” (Tarrow, 1997, 148).

A diferencia de otras tradiciones académicas, la aproximación a los movimientos sociales resaltada por Tarrow insiste entonces en “la variable crucial de la estructura política: el “cuando” de la formación del movimiento social” (1997, p.151). En ese sentido, al referirse Tarrow a la “estructura de oportunidades políticas” quiere señalar dimensiones formales o cambiantes del entorno político, que como *incentivos externos* propician la movilización disminuyendo el coste de esta. Se trata de recursos externos de los cuales dispone la población en un momento específico, el “cuando”, para impulsar sus demandas u objetivos movilizándose. Incentivos que compensan el costo que puede generar la movilización, a nivel grupal e incluso personal, de tal manera que una vez se dan dichos incentivos es mucho más probable que esta se suscite. En esa

dirección, aunque expresa que pueden señalarse más, Tarrow señala estos cuatro tipos de oportunidades políticas: la apertura del acceso a la participación, los cambios en los alineamientos de los gobiernos, la disponibilidad de los aliados influyentes, y las divisiones entre las élites y en el seno de las mismas. En síntesis, se trata de aspectos que pueden propiciar una transformación del régimen social y político tradicional, y de esa manera pueden propiciar la oportunidad para que expresiones sociales y políticas, que usualmente son marginadas, encuentren un canal para manifestarse a partir de la movilización. Por supuesto dimensiones que no están del todo inconexas entre sí, pues de una manera u otra el cambio en una de ellas puede generar transformaciones en otras.

Si observamos detenidamente el caso concreto del sur de Bolívar, el tránsito de identidades políticas que se visibilizó en la región a partir de la consolidación de ASOCIPAZ, y el eventual rechazo a la zona de concertación entre el ELN y el Gobierno, supuestamente estuvo antecedido por el deterioro paulatino de las relaciones que se habían establecido entre la población y la insurgencia, aunado al reconocimiento de los intereses de nuevas élites locales muy cercanas al narcotráfico; así lo señala Gutiérrez (2004). Es decir, acogiendo la interpretación de Gutiérrez en términos de Tarrow, podríamos pensar que se dieron cambios en los alineamientos del poder: la emergencia de un sector de la sociedad que asociado al narcotráfico se resistió a la coerción que históricamente ejercía la insurgencia. Así mismo, una recomposición de las alianzas históricas que se habían establecido en la región a partir de la aparición en el escenario político y social de nuevos aliados; las AUC que ya incursionaban en la región, pero a las cuales Gutiérrez no les da mucho peso en su análisis. De esa manera, aparentemente, se posibilitó la expresión política de movimientos contra insurgentes como ASOCIPAZ, que de 1999 a 2001 se opusieron de manera radical a la desmilitarización del sur de Bolívar para el eventual establecimiento de una zona de concertación entre el ELN y el gobierno. No obstante, el argumento es susceptible de caer en un círculo vicioso si no se prueba con contundencia. Bien puede pensarse, como ya lo señalamos, que la emergencia de

ASOCIPAZ fue una consecuencia del deterioro paulatino de las relaciones que se habían establecido entre la población y la insurgencia, junto con el reconocimiento de los intereses de nuevas élites locales muy cercanas al narcotráfico. Pero también podría pensarse que gracias al surgimiento de ASOCIPAZ es que se deterioran las relaciones entre la guerrilla y la población y se posibilita la emergencia de las élites que ya mencionamos, dejando de lado la subordinación que mantenían respecto a la insurgencia. Por supuesto, ya debe ser perceptible para el lector que la única posible solución ante esta encrucijada estaría en que se determinaran una serie de variables puntuales que demostraran como paulatinamente se fueron deteriorando las relaciones entre la población civil y la insurgencia, y que la modificación de dicha variable no solo antecedió a la fundación de ASOCIPAZ sino que a la vez la posibilitó.

Ahora bien ¿qué clase de variables podrían rastrearse en aras de sostener un quiebre de las relaciones entre la insurgencia y la población civil? Gutiérrez (2004) ha sostenido que dentro de las causas de dicho quiebre están el fortalecimiento de las redes de narcotráfico en la región como clase emergente reacia a los cobros extorsivos de la insurgencia, así como el descontento de grupos sociales y políticos; afectados por el secuestro y la extorsión armada de la guerrilla. Como hemos señalado ya, en la medida que pretendemos demostrar el tránsito de las identidades políticas en la región, necesitamos establecer una línea de base que exhiba a partir de una variable el entorno político que rige hegemónicamente en la región antes de la incursión del paramilitarismo en la región en 1997: en este caso lo haremos a partir de la variable “violencia coercitiva”. Esto con la finalidad de demostrar cualitativamente que una vez se agotan las relaciones históricas que había establecido la población con la insurgencia, y se consolida esta nueva élite social aliada al narcotráfico, cabría esperar una modificación de dicha variable, y por supuesto del entorno político y social, lo cual significaría una modificación del orden hegemónico de las agendas; la estructura de oportunidades políticas se ha transformado. En este caso sostendremos que el cambio en la composición de las élites de la región, ante la emergencia de una “clase social” asociada a la producción de estupefacientes, se puede rastrear no solo a

partir del aumento de los cultivos ilícitos en el sur de Bolívar<sup>5</sup>; variable que nos puede señalar la emergencia de esta nueva clase criminal. Pues también, como puede ya intuirse, la emergencia y consolidación del narcotráfico en la región no incide directamente en la crisis o disminución de las agendas contestatarias. Se precisa para ello de la fuerza coercitiva de las AUC que como actor armado incursionó en la región asociándose al narcotráfico que se consolidaba paulatinamente (Arias, 2010, p.2). Para ello precisaremos de una estructura teórica que nos permita entender el poder coercitivo de la violencia ejercida por la insurgencia y el paramilitarismo, así como los efectos de sus acciones sobre la población civil en términos de su identidad política.

Lo que queremos indicar entonces es la importancia de entender las categorías señaladas por Tarrow en un contexto de confrontación armada entre las AUC y la guerrilla, en el cual la población civil juega un papel fundamental transfiriendo sus lealtades de un actor a otro. Es decir, la apertura del acceso a la participación, los cambios en los alineamientos de los gobiernos, o la disponibilidad de aliados influyentes, se resignifican en el contexto social y político del sur de Bolívar una vez se constata la confrontación militar entre dos actores contrarios que se disputan la soberanía de la región. Por eso, tiene razón Gutiérrez (2004) al señalar que entre las causas de este quiebre en los alineamientos políticos y su recomposición está la crisis de gobernabilidad suscitada a partir 1997, cuando las FARC y el ELN decididamente impidieron las elecciones de Octubre, así como el surgimiento de una clase económica fundada en la producción y comercio de pasta de cocaína. Pero, efectivamente, al impedir la celebración de los comicios a través de amenazas a candidatos, alcaldes y concejales, lo cual llevó a muchos políticos locales a gobernar desde Cartagena, se suscitó un quiebre de las alianzas políticas establecidas desde antaño y en esa dirección la fundación de una nueva alianza con el paramilitarismo. Ahora bien, como

---

<sup>5</sup> A pesar de que el director de antinarcóticos de la Policía Nacional, Coronel Leonardo Gallego, señalaba cifras record de erradicación de cultivos ilícitos, el gobierno de Estados Unidos señalaba un aumento sin precedentes: “El satélite de la CIA señala que otra de las regiones donde han aumentado los cultivos ilícitos es en el sur de Bolívar, principalmente en la serranía de San Lucas, donde se cree que existen siembras de hoja de coca que sobrepasan las 3.000 hectáreas” Disponible en: <http://www.semana.com/nacion/como-arar-mar/35472-3.aspx>

bien lo señala también Gutiérrez, a pesar de que no incluye en su análisis el impacto que tuvo la confrontación armada en la región, las FARC y el ELN se oponían a la celebración de las elecciones locales como reacción a las acciones violentas que habían implementado las AUC contra alcaldes y concejales de municipios como Yondó, Río Viejo y Tiquisio, municipios donde la influencia de la guerrilla era considerable. Es decir, la recomposición de las alianzas políticas en torno a las elecciones de Octubre de 1997 se daba en medio de una confrontación militar considerable que no puede ser ignorada en el análisis. Así, las AUC aparecían en el escenario político como un nuevo aliado de las clases políticas regionales, que ya no se subordinarían a la coerción armada que hegemónicamente había desarrollado la insurgencia en la región: “en Santa Rosa, la naciente elite política y económica entró en una enconada oposición a los grupos guerrilleros y optó por la solución que ofrecían los grupos paramilitares; los políticos de Simití se sumarían poco después a esta decisión” (Gutiérrez 2004, p.36). En síntesis, resulta fundamental esclarecer el impacto de las lógicas de la violencia implementadas por los actores armados, pues el cambio en las lógicas y alineamientos del poder local fue suscitado por la escalada del conflicto entre la insurgencia, que había gozado históricamente de un poder hegemónico en la región, y el paramilitarismo que apenas incursionaba.

Así mismo, el papel fundamental que jugó la confrontación armada entre las AUC y la guerrilla se visibilizó también en las marchas de 1996 y 1998, en cabeza de organizaciones cívicas y campesinas que desde antaño habían liderado marchas y paros como los de 1971 y 1972 en San Pablo; o en 1985 en el sur de Bolívar. Al ser acusadas ahora estas movilizaciones de ser meros instrumentos de la insurgencia, en concomitancia con el surgimiento de una nueva clase económica fundada en el narcotráfico, junto con ganaderos, comerciantes y sectores pudientes de la región, se generó un aislamiento progresivo de las asociaciones campesinas y civiles que desde décadas atrás habían liderado los procesos sociales en la región. Una vez marginados de la vida pública estos movimientos campesinos: “la serie de manifestaciones de inconformidad frente al Gobierno fueron organizadas por los sectores económicos más

pueriles, la clase política local y los sectores económicos más pudientes” (Gutiérrez 2004, p.36), que a la vez encontraban en la incursión paramilitar un fuerte aliado que la liberaba ya de las contribuciones económicas exigidas por la guerrilla desde antaño.

A pesar de que hemos señalado, a partir de Tarrow, la importancia de atender a las variables que se generan en la estructura política de un entorno social específico, el “cuando” de la formación del movimiento social, para explicar el surgimiento de una movilización política contra insurgente, como se puede visibilizar en el caso de ASOCIPAZ, somos enfáticos al afirmar la importancia de interpretar estas variaciones de la estructura política a partir de las lógicas de la confrontación armada que se dieron en la región una vez incursionó el paramilitarismo. Es decir, ni el declive de la expresión política de las asociaciones campesinas, ni el auge de movimientos como ASOCIPAZ, puede ser comprendido con independencia del actuar coercitivo que implementaron los grupos armados en la región. Luego, la violencia jugó un papel determinante en la recomposición de la “estructura de oportunidades políticas”, en tanto incentivó y desestimuló a la vez la génesis y el declive de diversas expresiones sociales.

### **1.3 La violencia coercitiva como variable externa**

En el Magdalena Medio, y específicamente en el sur de Bolívar, el conflicto armado se ha desplegado de forma paralela a una multiplicidad de movilizaciones en aras a la reivindicación del derecho a la tierra, el desarrollo social y económico, la defensa de los derechos humanos, y una oposición radical al despeje de la región, como es el caso de ASOCIPAZ, entre otros objetivos. En ese sentido la diversidad de problemáticas que ha atravesado la región históricamente complica el análisis específico de cada una de las movilizaciones que se han generado. Es decir, a pesar de que analíticamente se observa que muchas de las movilizaciones que se han dado tienen un fuerte componente campesino, en tanto obedecen a las múltiples tensiones que se han generado en torno a la posesión de la tierra y a las diversas concepciones

de desarrollo agrario existentes, no por eso se puede generalizar afirmando que existe una relación recíproca y proporcionalmente directa entre variables como la concentración relativa de la tierra y la movilización campesina. A pesar de que en el Sur de Bolívar entre 1990 y 2001 se dieron casi la mitad de protestas que se generaron en la totalidad de la región (Prada, 2006, p.182), y esto puede estar relacionado con la desigual repartición de la propiedad de la tierra, en tanto en dicha subregión subsisten unidades latifundistas de más de 200 hectáreas junto con predios pequeños y medianos, no necesariamente toda movilización campesina se ubica en zonas de alta concentración relativa de la tierra. En el Magdalena Medio Santandereano, subregión en donde se ha generado una distribución de la tierra menos desigual en términos de concentración relativa de la propiedad, si bien la protesta ha sido menos concentrada, factores como el conflicto armado y el desarrollo político han generado manifestaciones en pro de la defensa de la vida y en general de los derechos humanos. En síntesis, un análisis de la movilización social desde la perspectiva de sus causas resulta equívoco pues como fenómeno social puede ser originado en una pluralidad de causas inaprehensibles en su totalidad. O nos podríamos ver enfrentados a un problema de “equivalencia observacional”, es decir, ante un hecho social como lo es una movilización social específica, podríamos atribuir diversas rutas observacionales sin poder discernir cual tiene mayor valor explicativo en términos causales (Vargas, 2009, p.435). Discernir las movilizaciones desde sus causas es una ruta investigativa que puede llevar a equívocos.

Como lo señalamos ya, adoptando la comprensión elaborada por Tarrow de la movilización social, esta no se genera por el nivel de agravios que subsista en un contexto social específico, sino por la estructura de oportunidades políticas que la favorece o reprime. Evidentemente un fenómeno como la movilización social puede estar originado en una pluralidad de factores que combinados entre sí hacen complejo cualquier análisis de este tipo. Además, desde un enfoque analítico que busque dar cuenta de las movilizaciones sociales desde sus causas, lo máximo que podríamos llegar a afirmar en el caso que nos ocupa es que las causas que impulsaron las

manifestaciones campesinas de los noventa han desaparecido, y han entrado en escena otro tipo de causas que explicarían las movilizaciones contra el despeje del sur de Bolívar, como ya lo hemos señalado a partir de la lectura que hace Ortiz. No obstante, resulta erróneo afirmar que las causas que impulsaron la movilización campesina en el Sur de Bolívar han desaparecido: ni los problemas en torno a la posesión y explotación de la tierra, ni el ausentismo estatal o la crisis de derechos humanos en la región ha sido resuelta. En esa dirección, no explicaríamos como se ha transformado la estructura de oportunidades políticas que favorece el auge de un tipo determinado de movilización, como lo es ASOCIPAZ, y se genera el declive de las movilizaciones campesinas que desde antaño habían liderado la protesta social en la región. Es por eso que en un contexto de confrontación armada hemos pretendido entender la violencia como una variable externa, que puede llegar a explicar el auge así como el declive de las diversas movilizaciones sociales en la región.

Ahora bien, emprender un estudio que tenga como eje transversal la violencia en Colombia, y concretamente en la violencia que se ha desarrollado en la región del sur de Bolívar, no es tarea sencilla. Como ya lo señaló en su momento la *Comisión de estudios sobre la violencia (1987)*, ella no es exclusivamente política pues posee un carácter multidimensional; violencia socioeconómica, política, sociocultural, territorial, e incluso la existencia de cierta cultura de la violencia, etc. Ahora bien, como ya se puede evidenciar, distinguir de manera específica entre casos concretos una violencia de otra es en verdad una tarea compleja. No obstante, esta investigación acogiendo el marco teórico propuesto por Kalyvas (2010, p.38), “reduce la definición de la violencia a su dimensión física”, específicamente la violencia dirigida contra los no combatientes o los civiles. Ahora bien, entendemos por civiles a todos aquellos que no son miembros de un grupo armado de tiempo completo, a pesar de que puedan prestar su colaboración de manera parcial. No obstante, dejando de lado la violencia no intencionada contra los no combatientes, encontramos una multiplicidad de formas de violencia que se puede ejercer contra los civiles: vandalismo, amenazas, tortura, detención, etc. Sin embargo, se tendrá en cuenta únicamente la violencia intencionada

dirigida contra los civiles que tiene como resultado la muerte violenta, es decir el homicidio<sup>6</sup>.

Luego, ¿cómo abordar un estudio de la violencia una vez hemos intuido el papel determinante que jugó en la recomposición de la “estructura de oportunidades políticas de la región del sur de Bolívar? Sin duda hay acercamientos válidos desde la sociología, el derecho, la psicología y hasta la educación, no obstante un enfoque propiamente político no debe dejar de lado las relaciones entre la violencia y el Estado, en tanto este último es el dispositivo del poder político por excelencia, ya sea porque se aborde desde su consolidación o su crisis. En esa dirección, acercamientos elaborados desde la Sociología y la Ciencia Política han entendido la violencia muchas veces como el resultado de la ausencia del Estado, o por una excesiva presencia de este que no reconoce las causas objetivas de la confrontación social y armada. Por ejemplo, para Daniel Pécaut (1988) la violencia tiene que ver menos con los abusos de un Estado plenipotenciario, y más bien puede ser entendida en la lógica de un Estado que deja espacios en la sociedad vacíos de su poder, dejando así a la sociedad sometida a un abandono que redundará en la instrumentalización de la violencia como mecanismo de resolución de conflictos. Y en ese contexto de abandono del Estado se puede invocar la existencia de causas objetivas que permitirían entender a los actores violentos como actores colectivos que reaccionan a través de medios armados a situaciones de injusticia y exclusión, ya sea por parte del Estado mismo, o de otros sectores de la sociedad. Por otra parte, en la lógica de los estudios realizados por Mauricio Rubio (1988), los esfuerzos analíticos de la violencia se dirigen hacia un estudio de las formas como los actores armados se entrelazan con la criminalidad del país, llevándolo a afirmar que la violencia colombiana es agenciada por profesionales del crimen en lugares donde se concentran los principales actores armados: mafias, guerrilla y paramilitares. En ese sentido, desde la perspectiva adoptada por Rubio los actores violentos no son bandidos sociales, sino criminales asociados a la delincuencia

---

<sup>6</sup> “El homicidio no agota el alcance de la violencia, pero es una forma carente de ambigüedad que puede medirse de modo más fiable que otras formas, que es por lo que se usa como indicador primario en estudios cuantitativos” Kalyvas (2010, p.38).

común. En síntesis, como ha señalado Fernán González (2002), la discusión entre las perspectivas, como la adoptada por Rubio, que insisten en el enfoque individual y criminalizador<sup>7</sup>, y los enfoques mucho más sociológicos arraigados en la existencia de causas objetivas dentro de la sociedad que explicarían el conflicto y la violencia generalizada, señalan la discusión entre la perspectiva sociológica clásica y el modelo económico de escogencia racional. Enfoques que al modo de ver de González se distancian en tanto adoptan distintos períodos de análisis: “unos parecen centrarse en el momento fundacional de los grupos, cuando era más claro su carácter societario y su base ideológica, mientras que otros parecen dedicarse más a aspectos posteriores de su desarrollo histórico, cuando los aspectos ideológicos y políticos se han desdibujado un tanto y predominan más los énfasis en los asuntos militares y las necesidades financieras” (2002, 28). Por supuesto, la complejidad de la violencia que se ha desplegado en Colombia exige la elaboración de análisis que invoquen causas subjetivas como objetivas. Análisis que no dejen de lado las intenciones y acciones de los actores que voluntariamente y de manera decidida han optado por la violencia, pero a la vez en una combinación con estudios que caractericen la situación de exclusión social, política y económica que se desarrolla en las distintas regiones, facilitando o no el auge y consolidación de los distintos actores armados.

Sin embargo, como se puede evidenciar ya, los distintos enfoques analíticos que hemos reseñado se orientan hacia la indagación de la génesis de la violencia en el país; una explicación de sus causas, quizás en vista del posible planteamiento de una solución que medie el camino hacia la paz. Sin embargo es necesario elaborar correctamente la distinción entre la guerra civil y la violencia en la guerra civil, pues “las causas de la violencia en las guerras civiles no pueden subsumirse bajo las causa de las guerras civiles” (Kalyvas, 2010, p.39). Las razones que podrían explicar el conflicto armado en el país no son susceptibles de explicar a la vez acciones violentas puntuales desarrolladas por los distintos actores armados. Los conflictos agrarios

---

<sup>7</sup> Dentro de los enfoques teóricos que han propiciado recientemente un análisis del conflicto centrado en la teoría de la elección racional encontramos a Paul Collier, quien en su ensayo *Doing Well out of war* (1999) resalta el carácter codicioso y criminal de los actores armados y violentos en medio del conflicto.

históricos que han existido, así como los continuos bloqueos que han existido para imposibilitar una participación política democrática y equitativa, solo por citar dos posibles causas históricas del conflicto armado en Colombia, no pueden de ninguna manera explicar las acciones violentas implementadas por el paramilitarismo y la insurgencia en el Sur de Bolívar.

Ahora bien, en la medida que pretendemos entender la violencia como una variable externa que es susceptible de estimular como reprimir la movilización social, y en ese sentido modificar la identidad política de los ciudadanos, no es de nuestro interés una indagación de las causas que dieron origen a la violencia en la región del sur de Bolívar: nos interesa es la violencia como fenómeno *en sí mismo*. Perspectiva que en los estudios sobre la violencia en Colombia no se ha adoptado, pues, como lo señalamos ya al inicio de este aparte, tradicionalmente se ha buscado establecer las causas de dicho fenómeno, y en un marco amplio los distintos estudios se han debatido entre explicaciones que invocan la presencia de causas objetivas o meramente subjetivas, en un conjunto de explicaciones que buscan establecer las causas de dicho fenómeno en términos sociales o políticos, abandonando de esa manera el estudio de la violencia como fenómeno autónomo con una lógica propia. No obstante, también encontramos estudios que a pesar de que se ocupan de la violencia en sí misma, lo hacen desde una perspectiva normativa que lejos de ser analítica adopta a lo sumo una actitud de condena, que en vez de aclarar si existe cierta racionalidad en el conjunto de acciones violentas, relega el fenómeno a la incompreensión absoluta señalando que la violencia como la barbarie es la expresión máxima de la irracionalidad. De esta manera la creciente violencia dirigida contra y entre la población civil no ha merecido la suficiente atención, o intento alguno de explicación sistemática. Muchas veces se relega la violencia como fenómeno a descripciones periodísticas lejos de toda explicación teórica, a pesar que las principales víctimas de la violencia en Colombia son los civiles, y gran parte de las víctimas mortales que se producen año tras año son producto del conflicto armado interno (García-Durán, 2008).

Luego, abandonando cualquier enfoque analítico que busque explicar la movilización social desde las causas, nos parece sugerente el acercamiento teórico que propone Kalyvas de la violencia entendiendo esta como una variable externa que puede incidir en la movilización social de manera positiva o negativa. Es decir, a pesar de que la violencia pueda ser implementada por múltiples motivos, **violencia instrumental**, o que encontremos casos en los cuales ella sea simplemente manifestación de la irracionalidad y la barbarie, **violencia expresiva**, la violencia tiene un valor coercitivo en el cual nos centramos en este estudio. Es claro que a pesar de podamos identificar motivaciones individuales como grupales en los perpetradores de las acciones violentas para su uso como el odio, la venganza, la locura, etc., así como razones estratégicas múltiples por parte de los líderes de los grupos armados, a nivel general la violencia tiene un fin de **exterminio** o de **control**. Para Kalyvas (2010, p.47) la diferencia entre la violencia que busca el exterminio y la que busca el control estriba en la posibilidad de que los blancos de la violencia tengan o no la opción de rendirse, o como se ve en el caso colombiano, de transferir sus lealtades al actor violento o más bien desplazarse en procura del cuidado de su vida. En tanto la violencia implementada en el Sur de Bolívar en contra de los no combatientes o civiles no pretendió en ningún momento el genocidio ni la limpieza étnica, entenderemos las acciones homicidas desde la perspectiva del control, es decir, haciendo énfasis en que las únicas víctimas de las acciones violentas no son los blancos mortales de ellas sino a la vez todos aquellos que se ven obligados a transferir sus lealtades motivados por el miedo, o obligados a desplazarse del territorio en aras de la defensa de su vida.

### **1.3.1 Incursión del paramilitarismo en el Sur de Bolívar y Guerra Civil**

Encontramos que la región del Magdalena Medio, de la cual hace parte el sur de Bolívar, se ha constituido históricamente como un territorio propicio para la existencia de diversos conflictos sociales y armados, particularmente en Barrancabermeja; puerto petrolero que a lo largo del siglo XX fue escenario de la expresión del descontento social y la violencia. Realidades como las contradicciones palpables del puerto

petrolero en términos de desarrollo, visibles en las luchas obreras impulsadas por la *Sociedad Unión Obrera* desde 1924, o las reivindicaciones populares impulsadas por movimientos cívicos en función de causas como la vivienda o la justicia social desde la perspectiva de género, como es el caso de la *Organización Femenina Popular*, o el *Movimiento Cívico, Obrero y Campesino* que desde 1975 se ha movilizó en protesta ante las deficiencias existentes en la prestación de servicios públicos básicos y carencias de infraestructura, y por supuesto los distintos movimientos de denuncia de violaciones de derechos humanos como el *Comité Regional para la Defensa de los Derechos Humanos CREDHOS*<sup>8</sup>, entre otros, nos lleva a sostener que efectivamente la lucha social se da en un contexto en el cual el Estado es inexistente, o frágil en términos institucionales para resolver las distintas realidades conflictivas que se gestan al interior de la sociedad. Así mismo, tienen especial relevancia en la región las luchas campesinas en tanto la tierra se constituye en el principal activo que es objeto de disputa en la región. Es por eso que, desde principios del siglo XX, la región del sur de Bolívar ha sido escenario de una multiplicidad de manifestaciones por parte de colonos que, constituyendo ligas campesinas que, con apoyo del Partido Socialista Revolucionario, buscaron la defensa de la propiedad de la tierra, llegando muchas veces a constituir alianzas con las reivindicaciones de los obreros de los distintos sindicatos en pro de la lucha agraria. Casos concretos de organizaciones nacionales como la Asociación Nacional de Campesinos (ANUC), impulsaron procesos de recuperación y apropiación de la tierra junto con asociaciones campesinas de carácter local, en un contexto armado en el cual prevalecen de forma dominante grupos armados como las FARC y el ELN que perciben la movilización ciudadana como “cajas de resonancia de sus propias propuestas políticas” (Prada, p.172). Lo que queremos señalar es que evidentemente la expresión política de los descontentos de colonos, campesinos y obreros, entre otros, sin ser directamente impulsada por el actor armado

---

<sup>8</sup> En 1988 nace el *Frente Común por la Vida, la Paz y la Democracia*, conformado por representantes de la administración municipal, los gremios, la Iglesia y las organizaciones populares, con el objetivo de explorar alternativas políticas y sociales que recuperaran la paz, la solidaridad y la convivencia en la ciudad, que para ese entonces ya se encontraba sumergida en una ola de amenazas y asesinatos selectivos de líderes y militantes de diversas organizaciones.

que prevalece hegemoníicamente, los grupos insurgentes, es permitida en tanto guarda cierta coherencia con los objetivos políticos y las agendas de los actores violentos que ejercen soberanía en el territorio.

Pero factores del contexto nacional y regional modificaron la expresión política de los distintos movimientos sociales. En la década de los ochentas, la incursión del narcotráfico en la región significó una nueva competencia por el uso de la tierra, así como favoreció la constitución de pactos entre narcotraficantes, ganaderos y militares en pro de la consolidación de grupos de defensa privada. Evento que tuvo como consecuencia la aparición de masacres y de amenazas hacia la población, particularmente en lo que respecta a las zonas donde influían con más fuerza los movimientos políticos de izquierda: el Magdalena Medio después de Urabá fue la segunda región donde se registro con más fuerza la persecución y el exterminio de militantes de la Unión Patriótica (UP). Por otra parte, la crisis desatada en el sector del agro al principios de los noventas gracias al impacto de las políticas neoliberales impulsadas por el gobierno central, redundaron en la crisis del sector agrario tradicional y el impulso de la ganadería extensiva, con la sucesiva concentración de la propiedad rural. Todo ello incidió, como señala Esmeralda Prada, en la disminución de más del 50% de las protestas campesinas en el decenio de 1990-2001, respecto a la década anterior.

Lo interesante del proceso de estos diversos movimientos y conflictos sociales para nuestro propósito, es que a partir de 1987 comienzan a aparecer en el escenario social organizaciones civiles interesadas en la defensa de los derechos humanos, como es el caso de CREDHOS<sup>9</sup>. Se trata de un fenómeno que puede ser interpretado como una

---

<sup>9</sup> En 1988 nace el *Frente Común por la Vida, la Paz y la Democracia*, conformado por representantes de la administración municipal, los gremios, la Iglesia y las organizaciones populares, con el objetivo de explorar alternativas políticas y sociales que recuperaran la paz, la solidaridad y la convivencia en la ciudad, que para ese entonces ya se encontraba sumergida en una ola de amenazas y asesinatos selectivos de líderes y militantes de diversas organizaciones.

toma de conciencia<sup>10</sup> por parte de algunos sectores de la sociedad, de las dinámicas de violencia que se han desatado de forma paralela a la movilización de los distintos movimientos sociales. Nos referimos a dinámicas de violencia que, como ha señalado el *Movimiento Nacional de Víctimas (MNV)*, así como otras organizaciones, fueron impulsadas de forma organizada por estructuras Paramilitares que comenzaron a operar desde los años ochenta en la región. En ese contexto, al principio de la década de los ochenta surgen en la región los primeros grupos de autodefensa, aunque su consolidación se daría a finales de la década de los noventa. En el caso de la incursión del paramilitarismo se trató de una acción estratégica no sólo en términos territoriales sino también políticos, pues el desenlace de esta incursión redundará en la fundación del Bloque Central Bolívar (BCB), que como grupo paramilitar extendió su poderío militar hasta los confines del poder político.

Así, desde los márgenes rurales de la región se inició la ocupación de los territorios presionando paulatinamente hacia lo urbano. Como ha señalado el *MNV*, es a finales de los ochentas que se inician las incursiones paramilitares desde la rivera derecha del río Magdalena, hasta que en 1995 CREDHOS denuncia incursiones desde el norte de la ciudad de Barrancabermeja, así como desplazamientos de la población desde San Vicente, El Carmen de Chucurí, Puerto de Parra, Cimitarra y Puerto Berrío. Decía en ese entonces el *Comité Regional de Defensa de los Derechos Humanos*:

“Según testimonios se nota un avance territorial por el norte, comprendido desde los límites con el municipio de San Alberto, departamento del Cesar, formando un triángulo con los municipios santandereanos de Puerto Wilches, por el occidente y Sabana de Torres, por el oriente; este avance territorial se extiende hasta los alrededores rurales de Barrancabermeja, en particular al corregimiento El Centro y la presencia anónima de miembros vinculados al paramilitarismo en los barrios nororientales: la red paramilitar se acaba de tejer con el proyecto implementado desde hace varios años con la ocupación de territorios limítrofes con Barrancabermeja por el sur –El Carmen, Cimitarra-, por

---

<sup>10</sup> Afirma Kriesberg respecto a la importancia de la toma de conciencia para determinar efectivamente la existencia de un conflicto: “Competition may or may not involve awareness, while conflict does” *Op.cit.*, p.2.

el sur occidente -Puerto Parra- y por el sur oriente –San Vicente de Chucurí, Simacota-”<sup>11</sup>.

Así se comenzaron a gestar las Autodefensas del Bajo Cauca y Norte de Antioquia; el grupo Muerte a Secuestradores (Mas); las Autodefensas campesinas del Magdalena Medio de Ramón Isaza, así como las Autodefensas Unidas de Santander y Sur del Cesar (Ausac), a cargo de alias “Camilo Morantes”, quien se haría tristemente celebre por la masacre acontecida en Barrancabermeja en 1999.

Sin embargo, es hasta 1997, después de la tercera cumbre de las autodefensas realizada en ese año, que se declara el Sur de Bolívar y Barrancabermeja como objetivo militar: “Barrancabermeja es tarea prioritaria, en razón a que la subversión ha reconquistado zonas que ya estaban libres de este flagelo”<sup>12</sup>. Decisión que según las versiones libres de “Julián Bolívar” ante Justicia y Paz le fue encomendada por Castaño, en coordinación con las autodefensas de Santander y César, y que inició en Barranco Lebrija, corregimiento de San Martín (Cesár), y el 11 de junio de 1998 comenzaron a movilizarse hacia Cerro Burgos, un punto estratégico para entrar al sur de Bolívar. No obstante, señala el mismo “Julián Bolívar” que dicha incursión no fue exitosa pues los hombres prometidos por Castaño para la mencionada incursión por parte de las ACCU nunca llegaron. Fue hasta una posterior incursión liderada por Salvatore Mancuso que se inició con éxito la toma a partir de Mico Ahumado, corregimiento de Morales, avanzando hacia San Blas, Monterrey, San Pablo, Cantagallo y Simití. San Blas se convirtió para el naciente BCB en la base estratégica, ya que sus vías facilitaban la comunicación con otros corregimientos y sus cerros permitían tener visibilidad sobre las veredas de su interés. Afirma “Julián Bolívar” que desde ese entonces San Blas fue ante todo un escenario común de convivencia y connivencia de la población civil y las Autodefensas Campesinas. Allí tuvo cumplida realización el aparato del “Estado sustituto” que debería reemplazar el “Estado

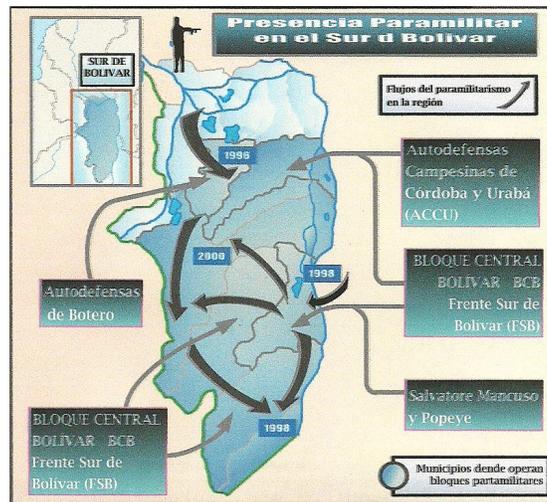
---

<sup>11</sup> Tomado de CREDHOS, *Informe derechos humanos en Barrancabermeja y su zona de influencia en el Magdalena Medio*, Septiembre de 1995 – Mayo de 1996.

<sup>12</sup> Documento de la III cumbre de las autodefensas tomado de: CREDHOS, *Informe derechos humanos en Barrancabermeja y su zona de influencia en el Magdalena Medio*, Junio de 1996 – Noviembre de 1996.

guerrillero”<sup>13</sup>. Efectivamente, “es, a comienzos de 1997, año en el que se disputaron con las guerrillas, especialmente el ELN, el control de municipios como San pablo, Santa Rosa, Cantagallo, Río Viejo, Simití, Montecristo, morales y Altos del Rosario (Arias, 2010, p.3).

### Dinámica de la Incursión Paramilitar en el Sur de Bolívar<sup>14</sup>



Ahora bien, dejando de lado el relato general sobre la incursión del paramilitarismo en el sur de Bolívar, el uso de la violencia en la ocupación estratégica de Mico Ahumado y otros corregimientos nos resulta sugerente señalar las dinámicas de la violencia que a futuro gestarán la lealtad de la población hacia el BCB. Se afirma que el 6 de Junio de 2000 cerca de 250 hombres incursionaron en Mico Ahumado. Inicialmente sostuvieron un combate con la guerrilla que tuvo entre sus primeros resultados el desplazamiento de por lo menos cerca de 200 personas. Posteriormente, y con lista en mano, el grupo paramilitar preguntó por campesinos y mineros de la región, entre estos todos los miembros de la junta directiva de *FEDEAGROMISBOL* y los líderes de la *Mesa Regional del Magdalena Medio de Trabajo Permanente por La Paz*, saquearon

<sup>13</sup> Pérez Alzate, Rodrigo, Primera y Segunda Versión libre ante Justicia y paz, texto sin publicar. Afirma Alzate, alias “Julián Bolívar” refiriéndose a la ocupación hacen de San Blas en el Magdalena Medio: “era pues, el “Vaticano” de las Autodefensas en el Sur de Bolívar. Fue ante todo un escenario común de convivencia y connivencia de la población civil y las Autodefensas Campesinas. Allí tuvo cumplida realización el aparato del “Estado Sustituto”, tan pronto como colapsó el “Estado Guerrillero”

<sup>14</sup> MNV, p.18.

campamentos mineros, quemaron casas y obligaron a los hombres a desplazarse y a las mujeres y niños los retuvieron. Acciones simultaneas se reportaron entonces en los municipios de Morales Santa Rosas y el corregimiento de las “Brisas” la “Unión” y los “Arrayanes”, dejando como saldo varias personas desaparecidas<sup>15</sup>. Desde las primeras acciones armadas el naciente Bloque Central Bolívar desarrolló acciones violentas coercitivas como el desplazamiento forzado, el asesinato selectivo, así como la incineración de casas y establecimientos públicos, en aquellos poblados acusados de tener alguna lealtad con la insurgencia. En solo un par de meses de 1998 el Equipo Nizkor registró en el Sur de Bolívar más de 10.000 desplazados, así como más de 500 viviendas incineradas en la región<sup>16</sup>. En su modus operandi, como señala Angélica Arias, los paramilitares en su incursión en la región llevaron una avanzada contra la población civil para conseguir dominio y control territorial a través de la masacre como ejercicio de violencia indiscriminada<sup>17</sup> (2010, p.4).

¿Qué significó entonces la incursión y establecimiento de las AUC en el sur de Bolívar a través de este particular uso de la violencia? Confirma ante todo una concepción del conflicto como una escisión o alteración de la soberanía. Escisión que se puede interpretar en términos de “la ruptura del monopolio de la violencia legítima por la vía del desafío armado interno” (Kalyvas, 2001, p.8), así como en el sentido que dos o más actores violentos ejercen soberanía en diversos grados en partes distintas de lo que era dominio exclusivo del Estado, o debería serlo. Se trata de un conflicto armado donde las distintas dinámicas violentas no buscan simplemente el dominio del territorio exclusivamente a partir de una ocupación militar, lo que significaría una guerra convencional, pues en el caso que citamos de Mico Ahumado y demás corregimientos no fue suficiente el combate con la guerrilla, pues la incursión armada de las AUC tiene como principal objetivo a la población en ausencia de combates directos con la

---

<sup>15</sup> Disponible en: <http://www.tlahui.com/politic/politi00/politi10/co10-20.htm>

<sup>16</sup> Estadísticas disponibles en: <http://www.derechos.org/nizkor/colombia/doc/barra.html#Anexo%202>

<sup>17</sup> Como señala el observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH: “la actividad de este grupo armado fue particularmente elevada a partir de 1998, cuando llevó a cabo algunas de las masacres más sangrientas y numerosas que haya presenciado el país como las de El Salado (1997-2000), Tolúviejo (1999), Chengue (2002), Pichilín (2002), Ovejas (2002) y Macayepo (2002)” “Panorama Actual de Bolívar, 2008, p.8.

insurgencia. Se hace necesario entonces el control político de la población a través de diversas lógicas de violencia que redundan en la variedad de relaciones entre la sociedad civil y los diversos grupos armados. Razón por la cual supone entonces este contexto la inexistencia de un régimen o poder soberano que posee el monopolio de la violencia legítima. Se trata entonces en palabras de Kalyvas de una Guerra Civil, donde “por lo menos dos actores políticos, partidarios de monopolios segmentados de violencia la producen, y la población objetivo o bien es partícipe de las oportunidades o es obligada a transferir su lealtad y sus recursos al actor político rival” (Kalyvas, 2001, p.8). En ese sentido para Kalyvas la violencia es un proceso social del cual participan de diversa manera la sociedad y diversos actores en pro del control político. Por eso para las AUC no es suficiente expulsar a la guerrilla del ELN de la región, sino que se hace necesario realizar un uso estratégico de la violencia sobre la población en aras a destruir las alianzas que históricamente había construido la insurgencia, y así edificar las propias.

Ahora bien, en la medida que nos interesa emprender un estudio que nos permita comprender como las distintas dinámicas violentas implementadas en la región del sur de Bolívar redundaron en el auge de un movimiento anti insurgente de ASOCIPAZ, en detrimento de las luchas sociales reivindicatorias que se habían desarrollado históricamente, antes que pretender un estudio de las causas de la violencia en el sur de Bolívar, aspiramos entender la violencia como una variable externa que es susceptible de estimular como de reprimir la movilización social, y así modificar la identidad política de los habitantes de dicha región. En esa dirección hemos adoptado la propuesta teórica desarrollada por Stathis Kalyvas, “La lógica de la violencia en la guerra civil”, pues nos permite elaborar un análisis de la violencia como fenómeno autónomo en un contexto de “guerra civil”. Me explico, los conflictos armados, ya sea entre Estados o entre facciones sociales, se diferencian no sólo por el número de víctimas que producen, sino también por el grado de intervención de los civiles en

medio del conflicto. Como señala Kalyvas<sup>18</sup>, los conflictos en los cuales los civiles son el objetivo primario y las víctimas no se producen entre los ejércitos regulares, pueden denominarse “Guerras civiles”, o nuevas guerras desde la perspectiva de Kaldor: a menudo la violencia en las guerras civiles ocurre entre personas conocidas entre sí, el asesinato es más común que el combate mismo. Se trata entonces de un conflicto fundamentalmente irregular en el cual no hay causas completamente objetivas que den razón de la confrontación bélica, así como se trata de una confrontación en la que en términos de Kalyvas (2011): “no existen vanguardias claramente definidas; las fronteras o líneas divisorias, son porosas y cambiantes (...) así los combatientes irregulares y sus simpatizantes no son identificables” (p.7). En síntesis, en la “Guerra civil”, como es comprendida por Kalyvas, las estructuras militares si no son inexistentes son eminentemente débiles, así como se desdibuja la frontera entre los combatientes y los civiles. Se trata entonces de una propuesta teórica que nos permite aprehender las dinámicas de la violencia de las nuevas guerras: conflictos bélicos absolutamente irregulares al interior de los estados en los cuales no existe una frontera eminente que diferencie al combatiente del no combatiente, donde el combate directo es casi inexistente, y las fronteras territoriales se configuran continuamente.

### **1.3.2 Lógicas de la violencia y construcción de soberanía**

Ahora bien, en el contexto de la Guerra Civil, Kalyvas caracteriza los distintos tipos de conflictos armados dependiendo de la dinámica de violencia que se desarrolla, a partir de una tipología que distingue cuatro tipos de violencia dependiendo de dos criterios determinantes: si los actores “políticos” violentos pretenden gobernar a aquellos contra quienes utilizan la violencia o no, y si la violencia se produce de manera unilateral o no. En síntesis, según el propósito que persigan las acciones violentas y el agente que

---

<sup>18</sup> KALYVAS, “La violencia en medio de la guerra civil: Esbozo de una teoría”, *Op.cit.*, p1. Citando a Krieger afirma Kalyvas: “por lo menos ocho de cada diez personas muertas en las guerras civiles contemporáneas han sido civiles”(KRIEGER, NORMA, *Zimbabwe’s guerrilla war: Peasant voices*, Cambridge University Press, Cambridge, 1992, p.1)

las produce. La violencia<sup>19</sup> entonces puede ser desarrollada con dos finalidades: el exterminio o el sometimiento de la población, como ya lo habíamos señalado. Así mismo puede ser producida por un solo actor o por más de un actor: unilateral, bilateral o multilateral. El uso unilateral de la violencia con fines de sometimiento, con un carácter estratégico, se conoce como “Terror de Estado”, mientras que si persigue el exterminio físico puede ser denominado “Genocidio” o “Limpieza étnica”. Distinto es el caso cuando más de un actor violento persigue el exterminio físico de la población pues en ese caso nos referimos entonces a un “Exterminio recíproco”. En realidad lo que nos interesa es plantear con Kalivas que si bien la “Violencia en la guerra civil” comparte con el “Terror de Estado” el hecho de que la violencia se ejerza con la finalidad deliberada de someter a la población, a través de la exaltación al límite del terror en todos aquellos que se identifican con la víctima, de tal manera que se perciban a futuro como víctimas posibles y de esa manera modelen su comportamiento, sus preferencias y lealtades, la “Violencia en la guerra civil” es ejercida por dos o mas actores violentos, es bilateral o multilateral. Ese es precisamente el caso del sur de Bolívar, en el cual encontramos al Paramilitarismo encabezado por las AUC, en confrontación con el ELN y las FARC, en aras a la construcción de lealtades en la población a través de su sometimiento.

Entendemos entonces por Guerra Civil, desde la teoría de Kalyvas, a aquel conflicto en el cual se evidencia una escisión o alteración de la soberanía. Escisión que se puede interpretar en términos de “un combate armado dentro de los límites de una entidad soberana reconocida, entre partes sujetas a una autoridad común al comienzo de las hostilidades” (2010, p.35), así como en el sentido que dos o más actores

---

<sup>19</sup> La teoría expuesta por Stathis Kalyvas acerca de la lógica de la violencia en medio de la guerra civil, reconoce la necesidad de disociar conceptualmente entre guerra civil y la violencia de la guerra civil. La necesidad de esta disociación la señala Kalyvas a través de una analogía de carácter político: “las elecciones son causa de estrategias de política en las democracias; aún así, el estudio de esa estrategia de política no se subsume bajo el estudio de las elecciones”. Efectivamente, si la violencia en las guerras civiles no se desarrolla aleatoriamente y sin propósito, ella puede constituirse como objeto de estudio independiente.

violentos ejercen soberanía en diversos grados en partes distintas de lo que era dominio exclusivo del Estado, o debería serlo. Se trata de un conflicto armado donde las distintas dinámicas violentas no buscan simplemente el dominio del territorio a partir de una ocupación militar, lo que significaría una guerra convencional, sino el control político de la población a través de diversas lógicas de violencia que redundan en la variedad de relaciones entre la sociedad civil y los diversos grupos armados. Razón por la cual supone entonces este contexto la inexistencia de un régimen o poder soberano que posee el monopolio de la violencia legítima. Sobre la violencia en la guerra civil Kalyvas afirma: “por lo menos dos actores políticos, partidarios de monopolios segmentados de violencia la producen, y la población objetivo o bien es partícipe de las oportunidades o es obligada a transferir su lealtad y sus recursos al actor político rival” (Ibidem) En ese sentido para Kalyvas la violencia es un proceso social del cual participan de diversa manera la sociedad y diversos actores en pro del control político.

Ahora bien, como señalamos ya, las distintas investigaciones acerca de las guerras civiles que se desarrollan o se han desarrollado usualmente concentran su atención en las causas del conflicto, las vías para su culminación, así como en los caminos necesarios para la sostenibilidad de la paz, sin embargo pocas veces se estudia la violencia como un fenómeno autónomo. Atender de manera independiente a la violencia en la guerra civil significa entenderla como un proceso unitario, es decir, no como un conjunto de eventos aislados, o simplemente como consecuencia de un conflicto. En tanto se concibe que la violencia no se ejerce de manera azarosa sino a través de una lógica que persigue una finalidad, dado el estado del conflicto que se está analizando, esto implica que la violencia es susceptible de ser examinada desde una visión de conjunto. Un marco comprensivo unitario que abarque incluso a las acciones o mecanismos que sin ser explícitamente violentos se insertan en las dinámicas de violencia, así como ir más allá de los victimarios y de las víctimas para comprender integralmente a todos los actores que hacen parte de este proceso, específicamente la población civil que directamente no se involucra en las acciones

violentas. En ese sentido, la población civil adquiere entonces en ese sentido un papel protagónico pues sus preferencias y lealtades se constituyen en un componente determinante del conflicto, pues si la guerra civil se caracteriza por el reducido número de combates directos, los civiles y sus acciones se hacen definitivos en términos de filiación del apoyo popular<sup>20</sup>. Y si los distintos grupos “políticos” violentos se encuentran en una palpable incapacidad para ejercer la soberanía en la totalidad del territorio del Estado, pues eso significaría la finalización de la guerra, la soberanía se encuentra en un estado de fragmentación en el cual la población también se encuentra, pues se halla sujeta a las distintas dinámicas del conflicto en tanto ella es un factor determinante para el desenlace de la guerra.

Determinante pues, como señalamos ya, la violencia en medio de una Guerra Civil se desarrolla por parte de actores *internos* como *externos*. Nos referimos a que las diversas acciones violentas no son ejercidas simplemente desde los actores violentos hacia la población, lo cual supondría una victimización de ella. En contextos de soberanía fragmentada, en donde la violencia se desarrolla con una lógica de control, las acciones violentas de carácter selectivo suponen el apoyo de la población civil en términos de información. La **violencia selectiva**, primer tipo de violencia que caracteriza Kalyvas, requiere radicalmente del apoyo de la población para poder ser implementada, de otro modo los actores violentos despojados de toda red de información que le puede llegar a proveer la población, a lo sumo solamente pueden implementar una **violencia indiscriminada**, segundo tipo de violencia. Al modo de ver de Kalyvas la violencia no puede ser un proceso que únicamente se entiende desde las acciones que emprenden los diversos grupos contra los civiles, pues en medio de la comunidad se desarrollan incentivos y estrategias, transacciones y compromisos, entre los actores externos, o grupos violentos, y los internos, la comunidad.

---

<sup>20</sup> Por supuesto, entre las causas que generan filiaciones se pueden encontrar beneficios de carácter material o inmaterial, como lo es el hecho de conservar la propia vida. El abanico de preferencias que movilizan a la población es amplio pero lo cierto es que es un factor exógeno a la guerra en tanto se modifican constantemente.

En esa dirección las dinámicas y lógica violentas en medio de la Guerra civil antes de pretender el dominio de un territorio buscan ejercer acciones soberanas sobre la población civil, su dominio en aras a la configuración de lealtades al interior de la comunidad. Por eso la confrontación armada entre grupos armados multilaterales, ante un panorama de escisión de la soberanía, significará a *grosso modo* una lucha por el control político en diversas áreas, es decir, hay una dimensión territorial en el uso de la violencia. Kalyvas en esa dirección propone una división analítica del conflicto armado a partir de los diferentes grados de soberanía que se ejerce en distintas partes del territorio sumergido en medio del conflicto:

“el Estado en cuestión está más o menos intacto en las regiones de fácil control por parte del ejército regular. (...) En las regiones apartadas, los representantes del Estado, tanto formales como informales han sido eliminados o han huido, y se ha establecido un Estado opositor insurgente. (...) Por último, existen zonas intermedias donde la soberanía está fragmentada. Se trata de áreas en contienda, donde el apoyo de la población civil constituye el factor de mayor importancia (...)” (2001, p.10)

En este panorama de fragmentación de la soberanía es donde la violencia se ejerce con una lógica determinada en aras del respaldo de la población. Estas lógicas o usos estratégicos de la violencia son variados no solo temporalmente sino espacialmente. El análisis de Kalyvas por lo pronto analiza las dinámicas de violencia desde un modelo que adopta una perspectiva espacial, así como desarrolla hipótesis sobre las transacciones que se desarrollan al interior de la comunidad de cara a los actores violentos.

Zona 1 – Ejercicio completo de soberanía por parte del actor “A”. Se ejerce en esta zona un monopolio absoluto de la violencia, por lo tanto serán poco probables las acciones violentas de carácter masivo o indiscriminado. En cuanto a la población civil se trata de una zona de baja desertión, razón por la cual las denuncias o flujos de información suelen ser falsos. Sin embargo se suelen dar denuncias masivas, pues es mucho más seguro denunciar donde solo ejerce poder un soberano y no hay peligro alguno para los informantes.

Zona 2 – Fragmentación de la soberanía: zona en la cual el grupo que ejerce plena soberanía en la Zona 1, “A”, ejerce algún control pero compite por la soberanía con algún otro actor violento que incursiona frecuentemente, “B”. Zona de probable desertión por parte de la población civil, así como de alta credibilidad de las denuncias. El grupo hegemónico acudirá más al uso de la violencia selectiva<sup>21</sup>, mientras que el grupo más débil posiblemente a la violencia indiscriminada<sup>22</sup> en tanto no posee redes de información.

Zona 3- Área de disputa: Zona que define Kalyvas como “lugar donde el gobierno gobierna de día y los insurgentes de noche” (Kalyvas, 2001, p.19). Zona de denuncia correcta. Contrario a lo que se pensaría se trata una zona que no es efectivamente la más violenta, a pesar de que en ella hay una fuerte disputa. Por otra parte el uso de violencia indiscriminada supondría teóricamente, según Kalyvas, la posibilidad de una huida masiva hacia el bando contrario (Cfr. 2006, 203-204) En ella los actores violentos se encuentran incapacitados para obtener información precisa que les permita focalizar sus acciones.

Zona 4 – Zona de control del grupo insurgente “B” pero en la cual no pueden evitar incursiones del grupo “A”. Zona de probable desertión por parte de la población civil, así como de alta credibilidad de las denuncias. El grupo hegemónico acudirá más al uso de la violencia selectiva, mientras que el grupo más débil a la violencia indiscriminada.

Zona 5 – Control absoluto del grupo insurgente “B”: Zona en la cual ejerce plena “soberanía” el actor insurgente, por lo tanto serán poco probables las acciones violentas de carácter masivo. En cuanto a la población civil se trata de una zona de

---

<sup>21</sup> Se trata de un tipo de violencia que se caracteriza por su personalización en aras a ejercer una fuerte coerción que evite la defeción individual, así como el flujo de información a los actores rivales o que tienen un control menor. (Cfr., KALYVAS, STATHIS, *The logic of violence in civil war*, Cambridge. 2006, p, 173)

<sup>22</sup> La violencia indiscriminada es completamente impersonal, y demuestra la incapacidad que tienen los actores violentos para acceder a información específica, dado el riesgo que ello implica para la población. Por otra parte, tiene funciones coercitivas en tanto busca generar comportamientos adversos por parte de la población en tanto se busca responsabilizar de las acciones hostiles al grupo adverso. (Cfr. KALYVAS, 2006, p.171)

baja deserción, razón por la cual las denuncias o flujos de información suelen ser falsos. Sin embargo suelen ser denuncias masivas pues es mucho más seguro denunciar donde solo ejerce poder un soberano.

Por supuesto, un estudio estricto de este tipo significaría una apropiación de datos exactos del ejercicio de la violencia en cada uno de los municipios que conforman el Sur de Bolívar. Problema muy complejo en tanto no hay estadísticas discriminadas disponibles del ejercicio de la violencia desarrollada por cada actor en cada municipio. Por lo tanto entenderemos que la incursión de las AUC en el sur de Bolívar se puede aprehender de manera general a partir del uso coercitivo que hace de la violencia, ya sea discriminada o selectiva, sin tratar de determinar que zonas son de control hegemónico o en disputa con la insurgencia.

#### **4. Metodología del estudio de caso y fuentes**

Ahora bien, hasta ahora hemos establecido la problemática que abordaremos en este estudio, así como los fundamentos teóricos sobre los que se sostiene. A saber, la idea de que en la génesis de las movilizaciones impulsadas por ASOCIPAZ jugó un papel fundamental la violencia coercitiva impulsada por el paramilitarismo en la región del sur de Bolívar, a partir de una transformación de las lealtades políticas de la población que históricamente habían encontrado en la insurgencia eco de sus exigencias. Por otra parte, a partir de las teorías de Sidney Tarrow y Stathis Kalyvas, hemos hecho explícitos los conceptos que debemos operacionalizar, en aras a demostrar de forma empírica en esta investigación como el progresivo avance militar del paramilitarismo incidió en el declive de la movilización contestataria en la región, para así favorecer progresivamente una agenda anti insurgente, como se expresó en las movilizaciones de ASOCIPAZ.

Ahora bien, como lo señalamos ya, desde la perspectiva de región en construcción precisamos de una descripción cualitativa de la principales agendas que se disputan la construcción del territorio. No obstante, como se puede intuir, una

descripción total de los múltiples actores no solo resulta un ejercicio inabarcable sino a la vez excede los alcances de este trabajo. En el caso del Sur de Bolívar habría que discriminar las múltiples agendas de los pobladores: campesinos, mineros, “raspachines”, comerciantes, etc. Así como discriminar las agendas de las organizaciones no gubernamentales, agencias de cooperación, la agenda del Estado, las de los grupos armados, mafias, etc. Insistimos, una tarea inabarcable. Por lo tanto, centraremos nuestra atención en tres agendas centrales para nuestro propósito: la agenda campesina, la del paramilitarismo y la insurgencia. Lo discriminamos de esta manera fundados en dos razones. Primero, a pesar de que en el territorio durante la última década han hecho presencia en la región múltiples agendas, como las impulsadas por agencias de cooperación internacionales y organizaciones no gubernamentales, hay una constante histórica en la agenda campesina, impulsada por los habitantes de la región en toda su multiplicidad: campesinos, colonos, mineros, pescadores. Además, se trata de la agenda que es afectada de forma fundamental una vez se implementa la violencia coercitiva por parte de los actores armados en tanto estos dirigen su violencia contra la población. Segundo, aunque es importante la intervención del Estado en la construcción de la región, es hasta el 2001 que implementa una presencia armada decisiva a partir del Plan Colombia. Evento muy posterior a la incursión del paramilitarismo, así como concomitante a la emergencia de ASOCIPAZ. Luego, centraremos nuestro interés en las agendas que exhibe el paramilitarismo y la insurgencia en la región, en tanto se trata de dos actores armados con capacidad suficiente para implementar acciones violentas coercitivas que modifiquen la lealtad de los pobladores.

En tanto nuestro interés se centra en la justificación del valor político de la violencia implementada por los actores armados, dado su carácter coercitivo, como lo expusimos ya, precisamos de un análisis cualitativo que nos permita aprehender las dinámicas de la violencia en la región. A pesar de que la violencia coercitiva tiene un doble carácter, como lo señala Kalyvas, ya que puede ser selectiva o

indiscriminada, y si se precisa aprehender la dinámica territorial del conflicto habría que atender estas variables, nos centraremos exclusivamente en la variable general de violencia coercitiva. Dos razones nos llevan a tomar esta decisión. Primero, no existe, o es de difícil acceso, una base de datos estricta que defina municipio por municipio el número de víctimas causadas por actos de violencia selectiva o indiscriminada. Así mismo, no es de nuestro interés describir como se fue dando el avance del paramilitarismo por la región pasando de zonas de disputa con la insurgencia, a zonas de control o hegemonía paramilitar. Segundo, nos centraremos en la violencia coercitiva en tanto ella está dirigida contra la población civil en pro de la constitución de soberanía y modificación de las lealtades. Luego, después de la descripción cualitativa de las tres agendas que hemos mencionado precisamos un análisis cuantitativo que demuestre como se da la emergencia de una agenda y el declive de otras. Para ello, y continuando con la comprensión política que hemos desarrollado en torno al valor de la violencia coercitiva, haremos uso de la base de datos del centro Centro de Recursos para Análisis de Conflictos (CERAC) en vista a exhibir la dinámica que ha tenido el conflicto armado en la región.

A este respecto señalamos varias dificultades así como límites de esta investigación. A pesar de la profundidad de la base de datos de CERAC ésta discrimina el país a partir de su división departamental, ignorando que las dinámicas del conflicto armado no obedecen a la división política del país. Por lo tanto los datos de que disponemos son del departamento de Bolívar, sin una aprehensión específica del sur, que es nuestro objeto de estudio. Así mismo, la base de datos de CERAC parte de 1988, lo cual ignora que el año de establecimiento de la insurgencia en la región es alrededor de 1970. No obstante, suponemos una constante histórica del actuar insurgente en términos del uso de la violencia.

Como hemos señalado a partir de la propuesta teórica de Kalyvas, en la Guerra Civil el tipo de violencia que se produce se da en aras al control político, o el

establecimiento de una soberanía específica, depende del grado de control que se tenga sobre una región específica. Para poder demostrar esta hipótesis señalaremos que efectivamente el conflicto que se ha desarrollado en el Sur de Bolívar antes de buscar la ocupación territorial a través del combate con el grupo opositor, busca es la constitución de lealtades con los pobladores. Para ello, a partir de las variables “Eventos” y “Combates”, demostraremos que el conflicto armado en la región lejos de señalar lo que sería una guerra regular en la cual abundan los combates, exhibe que el combate directo entre actores armados es mínimo, y en cambio hay una preeminencia de “eventos” violentos que tienen en la población civil su principal objetivo. La violencia coercitiva al dirigirse contra la población civil también puede ser aprehendida a través de un análisis de la intensidad de violaciones de derechos humanos en la región.

## CAPITULO 2

### **LOGICAS DE LA VIOLENCIA: EL TRÁNSITO DE IDENTIDADES POLITICAS**

Las movilizaciones contrainsurgentes que promovió ASOCIPAZ, en el Sur de Bolívar en 1999, fueron el fruto de la ocupación y el establecimiento hegemónico de las AUC en conjunto con nuevas clases emergentes asociadas al narcotráfico y a la agroindustria. Todo ello redundo en el declive de otras agendas políticas que históricamente se habían desarrollado en la región, como las impulsadas por campesinos y colonos, que en décadas pasadas se habían movilizado en pro de la defensa de sus derechos. A lo largo de este capítulo describiremos en la primera parte las agendas que se disputan la construcción del territorio del sur de Bolívar, así como pretendemos demostrar el impacto negativo que generaron las acciones violentas implementadas por el paramilitarismo en la institución de una agenda anti subversiva, a partir de un detrimento de las agendas contestatarias y reivindicativas, y el surgimiento de las movilizaciones de ASOCIPAZ.

#### **2.1 La Construcción del Sur de Bolívar como Territorio**

La problemática social y política que atraviesa el país hace décadas dista de ajustarse a la división política que adoptó Colombia en la Constitución de 1991. La división administrativa del país no corresponde a las dinámicas sociales y políticas que se han desarrollado en los distintos territorios, razón por la cual la constitución política de las regiones se encuentra atravesada por procesos sociales y de violencia en los cuales las identidades de los ciudadanos fluctúan; el Magdalena Medio es fiel ejemplo de ello. Constituida como una región que toma territorios de Antioquia, Bolívar, Boyacá, Cesar, Cundinamarca y Santander, históricamente ha sido epicentro de luchas políticas, sociales y armadas que han sido determinantes para la historia reciente del país: la génesis de los primeros movimientos obreros, el origen del experimento paramilitar en Puerto Boyacá, etc. De hecho, la región se denomina así gracias a una consideración

militar de los años cincuenta, que considerando esta zona de especial alteración del orden público se propone un plan específico para ella. En ese sentido, no pocos han demandado la constitución de esta región como un departamento independiente. La dificultad de acceso a sus territorios la ha alejado de los centros de administración gubernamental, lo cual la ha constituido como una región que padece de un vacío estatal que servirá de catalizador para los distintos conflictos que se desarrollarán en su territorio.

Ahora bien, parte del Magdalena Medio está constituido por el sur de Bolívar, sub región de la que nos ocupamos en este estudio. Se trata de un territorio de una extensión cercana a los 16 mil kilómetros cuadrados con una multiplicidad de riquezas naturales, y compuesta por dieciocho municipios alejados geográficamente de Cartagena, epicentro administrativo del departamento de Bolívar. Esta región posee una especial importancia geográfica al estar compuesta por escenarios significativamente estratégicos como lo son la Serranía de San Lucas y la depresión Momposina. Se trata de un punto estratégico en tanto limita con seis departamentos: Sucre, Magdalena, Córdoba, Antioquia, Santander y Cesar, y a la vez se ve rodeada al oriente con el río Magdalena, al occidente al río Cauca, al sur el río Cimitarra y al norte el Brazo de Loba. Todas estas razones hacen de esta región un lugar estratégico, no solo porque significa una fuente de recursos invaluable en términos económicos, sino a la vez porque sus características topográficas, diversas entre zonas altas, bajas y planas, hacen de esta zona un territorio de especial movilidad que no solo permite el acceso a gran parte del país, sino a la vez, se constituye como un corredor invaluable para la movilización de tropas y el tráfico de productos ilegales.

Ahora bien, al ser una zona que fue ocupada progresivamente a partir de un proceso de colonización impulsado por la explotación de diversos recursos naturales, de ninguna manera dicho proceso ha desembocado teleológicamente en el establecimiento soberano del Estado en la región, y mucho menos en la emergencia e institución de una ciudadanía casi instantánea. El Estado-nación en Colombia lejos de ser un proyecto acabado y homogéneo, es un proyecto inconcluso y diverso. En

síntesis, lo que queremos resaltar, como bien lo ha señalado Benavides (2007), es que hay una relación íntima entre la configuración regional, la movilización social en el Sur de Bolívar y la constitución de sus pobladores. Es decir, la manera como se ha articulado la acción de los habitantes del territorio respecto a las múltiples exigencias que les ha demandado la región en términos económicos, sociales y políticos, que en el primer capítulo hemos denominado “agenda”, ha determinado progresivamente la configuración del sur de Bolívar como región en articulación con el Estado. Lo regional emerge entonces como una práctica social, en la cual territorio, poder y cultura se interrelacionan entre sí en la producción de significados. Por lo tanto, las movilizaciones en el Sur de Bolívar surgen como respuesta a las condiciones geográficas, naturales, económicas y sociales que se le imponen a los habitantes de dicho territorio, creando así formas particulares de habitar, ser y vivir.

### **2.1.1 La región del Sur de Bolívar: caracterización**

Históricamente esta región ha sido reconocida por la inmensa riqueza que posee en términos de recursos naturales: oro, bosques dispuestos para la explotación maderera, tierras fértiles, reservas de agua, petróleo. Recursos que han constituido esta región como un territorio de colonización, dispuesto para acoger migrantes de distintos lugares del país atraídos por la explotación de sus recursos. En ese sentido, la construcción de la región del Sur de Bolívar por parte de sus habitantes ha sido un proceso que se desarrolla conforme a sus distintas dinámicas de explotación económica. Luego, precisamos de una caracterización de la región que nos permita entender las diversas condiciones económicas en las que se encuentra inmersa, en tanto la identidad de los pobladores y sus agendas se encuentra en una íntima relación con el territorio y su explotación. En síntesis, lo que esperamos evidenciar es que la situación económica que ha atravesado históricamente la región va a configurar una problemática social afable a la ilegalidad y al conflicto armado; problemática alimentada por el encuentro y la confrontación entre las economías campesinas y las de los grandes propietarios.

La posesión y explotación de la tierra va a configurar no sólo la principal problemática social y política de la región, sino a la vez las múltiples agendas de los pobladores de la región. A pesar de que el proceso de ocupación de la región se inicia en épocas coloniales, es hasta principios del siglo XX que se comienza a evidenciar la problemática en torno a la tierra. Entre 1901 y 1931 se adjudicaron entre 50.000 y 100.000 hectáreas de terrenos baldíos en los municipios de Simití, San Pablo y Morales (MNV, p.6), generando conflictos entre colonos y propietarios. Problemática que se ahondaría ante las oleadas migratorias de aquellos que escapando de las violencias de los años cuarenta eligieron el Sur de Bolívar como una opción habitable, razón por la cual el INCORA se vio en la obligación de declarar en 1965 varias zonas de San Pablo como tierras baldías alimentando de esa manera la codicia de colonos y terratenientes.

Por otra parte, la mayor parte del sur de Bolívar hará parte de la Zona de Reserva Forestal del Río Magdalena (ZRF), figura creada en 1959 mediante la ley 002 para proteger las zonas de mayor riqueza natural en el país (Fonseca *et al*, 2005, 41). Se trata de tierras con un potencial maderero enorme, así como con aptitud para la explotación agrícola y ganadera, contando por supuesto con sus riquezas en fauna y flora. Según el estudio de Vilorio (2009, p.21), a los municipios del Sur de Bolívar le corresponde más de la mitad de hectáreas de reserva de la totalidad del Magdalena, es decir, 1.132.427 hectáreas de los dos millones aproximados que le corresponden a todo el Magdalena Medio. El agravante de esta situación está en que de los municipios del sur de Bolívar el 73% de su territorio hace parte de esta zona de reserva forestal. Situación que imposibilita al acceso de títulos de propiedad, así como a créditos, lo cual sitúa a los campesinos en una situación de vulnerabilidad llevándolos a la pobreza y a la miseria, así como contribuye al crecimiento de economías ilegales como la de la coca o la extracción ilegal del oro. Sin títulos de propiedad, y con una baja densidad de explotación de la tierra, la economía campesina históricamente se ha desarrollado en torno a la agricultura, la minería y la pesca. Actividades desarrolladas únicamente con fines de subsistencia y muy precarias debido a los métodos rudimentarios de

explotación, así como aunadas a las bajas posibilidades de comercialización dadas las pobres condiciones de infraestructura.

Para la década de los noventa, y como fruto de la presión ejercida por las “marchas cocaleras” se trató de otorgar la propiedad de la tierra a campesinos y colonos a través de la ley 160 de 1994 que establecía las Zonas de Reserva Campesina (ZRC). Ley cuyo fin era otorgar la propiedad a pequeños propietarios, con la condición de que los campesinos asumieran el manejo responsable y el cuidado de los recursos naturales, y a la vez evitar la concentración de la propiedad rural. Así, en 1996 se crearon en todo el país seis ZRC, y en el Sur de Bolívar específicamente dos: la ZRC del Valle del Río Cimitarra, y la de Morales-Arenal. No obstante, a pesar de que los líderes de dichas comunidades campesinas fueron perseguidos desde la creación de las zonas, es para el 2002 que la violencia se escala a través de amenazas y muertes selectivas, e incluso se le revoca el título de legalidad a la ZRC del Valle del Río Cimitarra. Al modo de ver de Vilorio (2009, p.24) las ZRC se habían constituido en un obstáculo para la implementación de proyectos agroindustriales interesados en el monocultivo en grandes extensiones, como es el caso de la palma.

Ahora bien, desde el inicio de la creación de estas zonas el conflicto entre “agendas” se ha hecho presente en tanto existen divergencias radicales entre el discurso que expresan los campesinos respecto a las ZRC, y el que sostiene el gobierno y los organismos de cooperación internacional. Una vez se implementa el programa piloto de ZRC en el Sur de Bolívar, orientado por el Banco Mundial, el objetivo primordial era el desarrollo rural y regional como alternativa al conflicto armado. No obstante, lejos de los proyectos agroindustriales, las asociaciones campesinas han sostenido una apuesta por el “desarrollo alternativo”, lejos de economía de mercado fundada en el monocultivo que denuncian los campesinos piensan imponer los proyectos gubernamentales.

Muy significativa para la economía regional ha sido también la explotación del oro. Cerca de 16.000km<sup>2</sup> comprenden la zona de explotación aurífera de la región, con un

promedio de producción altísimo que alcanzó en la década de los noventa 55 toneladas de oro produciendo divisas para el país millonarias (Fonseca, et al, 2005, p.38). Se afirma que la producción de oro de esta región representa el 42% del total nacional (MNV, p.12). No obstante, la explotación minera del Sur de Bolívar se ha desarrollado de forma rústica, familiar, constituyéndose entonces en núcleo de ocupación de miles de personas, cerca de 32.000 de forma directa, que se benefician de este negocio y que con el tiempo han constituido asociaciones mineras. Ahora bien, las consecuencias de esta explotación han sido significativas en términos de destrucción de los recursos naturales, en particular el agotamiento de la superficie boscosa y la contaminación con los reductos de la explotación artesanal. En ese sentido las acciones estatales han estado destinadas a la formalización de la explotación, la protección del medio ambiente, así como a la organización de las comunidades mineras en su actividad. Por supuesto, como se puede prever, la incursión de los actores armados en las zonas de explotación aurífera ha incidido en la dinámica del conflicto (Ver Anexo 2).

Pero también la explotación minera ha enfrentado a la población con los intereses de diversas multinacionales. Si en un principio el Ministerio de Minas otorgaba licencias y estatus de propietarios a los descubridores de los distintos focos de explotación, lo cual generó en el futuro problemas para la concesión de licencias de explotación a multinacionales como Corona Golfields S.A. y otras, durante el gobierno Pastrana se modificó el código de minas en detrimento de los derechos de los pequeños mineros. Bajo esta nueva legislación se abolían de cierta manera las garantías de los descubridores de las vetas mineras, y a la vez se les obligaba a registrar y a legalizar las minas y su explotación bajo la amenaza de la pérdida de sus derechos: “el nuevo Código de Minas tipifica la explotación ilícita como un delito que ocasiona la pérdida de libertad” (MNV, p.14).

Por otra parte la región ha sido sumida en un aislamiento histórico en términos de vías de comunicación e infraestructura. Si bien la mayor vía de comunicación en todo el Magdalena Medio ha sido el río Magdalena como tal, mientras la región oriental del

Magdalena ha sido privilegiada a través de la construcción de la Troncal de Oriente (Bogotá-Bucaramanga-Santa Marta) y el Ferrocarril de Atlántico en las primeras décadas del siglo XX, la infraestructura en la parte occidental del río ha sido inexistente. Para recorrer el trayecto desde Cartagena hasta Simití o Santa Rosa del Sur, se precisan cerca de 14 horas por difíciles carreteras, mientras la distancian solo seis horas de Bucaramanga o cuatro de Barrancabermeja. Así mismo, la difícil topografía del departamento, que incluye ciénagas, depresiones, vertientes así como inundaciones diversas, han dificultado no solo la administración de la totalidad del territorio, sino a la vez han hecho que su proceso de poblamiento haya sido lento y de una manera u otra auspiciado por los distintos procesos sociales y económicos que han impactado la región (Ver Anexo 3).

Como se puede prever ante la falta de garantías para la explotación agrícola del territorio, visibles por ejemplo en las carencias en infraestructura que tiene la región, así como la problemática que históricamente se ha dado en torno a la posesión de la tierra, el Sur de Bolívar ha sido una región privilegiada para el desarrollo de economías ilícitas. La extracción del oro, y el cultivo de la marihuana y la coca, al ser lideradas por grupos armados al margen de la ley que se han disputado el manejo de estas economías, han jugado un papel determinante en el desarrollo del conflicto armado. Efectivamente, desde inicios de los ochenta, la producción de hoja de coca en la región, así como en Cesar y Santander, propició la aparición de nuevos migrantes que entraron en la competencia por el suelo junto con campesinos y latifundistas. Todo ello generó el establecimiento de pactos entre productores de hoja de coca, ganaderos y el ejército, en favor del establecimiento de grupos de defensa privada que contuvieran las acciones de la guerrilla. Acciones que por supuesto comenzaron a generar la crisis humanitaria que se agravaría en los noventa con la definitiva incursión del paramilitarismo. La región, predominantemente rural, se modificó entonces poblacionalmente en la década del noventa no solo en razón de la crisis del agro, sino también de las acciones violentas del paramilitarismo. Según De Roux (1996, p.35) hacia mediados de la década del noventa el 60% de la población del Magdalena Medio

habitaba en zonas rurales y dependía de actividades primarias. Sin embargo, las crisis agrarias incidieron en la modificación de la estructura regional pues se extendió la expansión ganadera así como los cultivos ilícitos, así como la escalada del conflicto armado llevó a que se desplazaran muchas personas hacia los cascos urbanos. Para los años noventa, posteriores a los planes gubernamentales de desarrollo implementados como el Plan Nacional de Rehabilitación (PNR), que concentró más la propiedad de la tierra<sup>23</sup>, la crisis del agro intensificó mucho más la expansión ganadera y el aumento de producción de hoja de coca. Así, los datos correspondientes a las hectáreas de coca cultivadas en la región han oscilado dependiendo de la dinámica del conflicto armado, ya sea la hegemonía de la insurgencia o del paramilitarismo. Como señala Vilorio (2009, p.45) las hectáreas de coca cultivadas en la región en el período de (1991-2007) muestran tres fases distintas: de 1991 a 1994 se evidencia una hegemonía del ELN y las FARC, de 1994 a 2001 hegemonía paramilitar, y del 2001 en adelante inicio de la ofensiva del Plan Colombia a través de aspersion de los cultivos ilícitos en la región por parte del Gobierno, que coincidía con la desmovilización del paramilitarismo (Ver Anexo 4). Evidentemente la incursión y posterior hegemonía de las AUC a partir de 1997 en la región coincide con un aumento exponencial de los cultivos ilícitos, razón por la cual se puede afirmar una estrecha relación entre este grupo armado y las mafias que dominan la región.

Nos encontramos entonces en esta breve síntesis con una diversidad de agendas que han incidido en la construcción de la región: campesinos, insurgencia, paramilitarismo y Estado. Aunque este último comienza a hacer una presencia efectiva en la región a partir del Plan Colombia implementado a partir de 2001. Agendas que deben ser explicadas detenidamente para definir su impacto y significado en torno a la dinámica social y política del territorio, pero sobre todo en términos de las identidades políticas de sus habitantes.

---

<sup>23</sup> Afirma Prada “El PNR ofreció comprar tierras a precios comerciales y pagaderas a seis meses, mientras que la ley de reforma agraria estipulaba compras a precios catastrales, pagaderas a bonos de desarrollo a 15 años” (2006, 175).

### 2.1.2 La Agenda Campesina: la tierra

La identidad, así como la agenda impulsada por los habitantes del sur de Bolívar, lejos de ser homogénea en el tiempo responde a las distintas oleadas migratorias promovidas por diversos procesos de explotación económica y las coyunturas del conflicto armado. A los problemas históricos de ausencia estatal y de posesión de la tierra se sumarán los conflictos generados por terratenientes y latifundistas asociados al narcotráfico, así como las crisis humanitarias generadas una vez el territorio se vuelve objeto de disputa por parte de la insurgencia y el paramilitarismo. En ese sentido la agenda de los campesinos o habitantes de la región absolutamente compleja integrará la lucha por servicios básicos ante el ausentismo del Estado, así como una defensa férrea de sus derechos como productores unida a la defensa de los Derechos humanos.

Los primeros antecedentes del sur de Bolívar señalan que es una región caracterizada por la explotación aurífera, proceso económico que desde tiempos coloniales van a impulsar su poblamiento desde el siglo XVII una vez el Fraile Pedro Simón señala la existencia de las minas de Simití y Guamocó en la Serranía de San Lucas, lo cual hizo necesaria la construcción de los primeros caminos (Viloria, 2009, p.10). Posteriormente la ocupación del territorio a finales del siglo XVIII estará liderada por las misiones evangelizadoras que tenían como misión congregar a las comunidades de indígenas y negros que habían escapado de Cartagena, “arrochelados”, o más bien personas libres que vivían lejos de los centros administrativos, y que en esta región se dedicaban a la explotación artesanal del oro. Además de la minería, la explotación del tabaco también fue significativa durante el siglo diecinueve junto con la navegación a vapor por el Magdalena y la explotación petrolera, que unida a las guerras civiles forzó la colonización del territorio<sup>24</sup>. Por otra parte, el auge de la explotación petrolera a principios del siglo XX en Barrancabermeja propició la migración de colonos hacia la

---

<sup>24</sup> Señala Viloria (2009, 11) que la navegación por el Magdalena inicio la explotación maderera a lo largo de la rivera, así como la aparición de las primeras poblaciones bolivarenses durante el siglo XIX y primeras décadas del XX: Morales (Bodega Central), Simití (Badillo, Cerro de Burgos) y San Pablo.

región, a pesar de que la construcción del oleoducto que llevaría el petróleo hasta Cartagena se dio por la rivera oriental del río Magdalena. No obstante, fue hasta 1940 que la explotación petrolera en Cantagallo propició olas migratorias desde los santanderes, la costa norte y Boyacá; fenómenos migratorios que se agravaron con la violencia suscitada por los partidos Conservador y Liberal posteriormente. Para finales del siglo XX, la producción de marihuana y cocaína, así como otros fenómenos, determinaron no solo la consolidación demográfica del territorio, sino a la vez la incursión de mafias, grupos armados insurgentes y paramilitares, que desataría procesos de desplazamiento forzado en la agudización del conflicto.

Los campesinos del Sur de Bolívar, o más bien sus habitantes, han transformado históricamente sus agendas de protesta conforme han sucedido múltiples coyunturas que los han llevado a elaborar alianzas así como conflictos con otros actores. En ese sentido desde inicios del siglo XX, en conjunto con los demás campesinos del Magdalena Medio, las luchas por la tierra se vieron fortalecidas por múltiples alianzas que se desarrollaron con el naciente movimiento obrero. Así, conforme avanzaba el proceso colonizador de la región, las luchas campesinas se dieron frente a terratenientes y latifundistas en pro de la posesión de la tierra, así como el reclamo constante de la presencia del Estado en términos de infra estructura. Si embargo, a pesar de que en el margen derecho del río muy temprano surgieron agremiaciones campesinas o gremiales de colonos, como la Liga Campesina de la Ciénaga del Opón o la Unión de Campesinos del Playón, es hasta la década del sesenta, cuando se percibe un cierre de la frontera agraria en el Magdalena medio santandereano, que comienzan a aparecer las primeras agremiaciones en el sur de Bolívar ante el impulso de migrantes que a falta de una reforma agraria extendían más la frontera agrícola. Es así como la problemática en torno a la posesión y explotación de la tierra se expresó en la región en la década del setenta, bajo el auspicio de la ANUC, en ligas campesinas en pro de la recuperación de la tierra para los campesinos a través de invasiones programáticas en San Pablo bajo el lema “tierra pal que la trabaja”. Toda esta situación se agravaría en la década del ochenta, cuando ingresan grandes

capitales del narcotráfico en la región dispuestos para la compra de tierras en alianzas con viejos latifundistas, ejércitos de defensa privada, y nuevos proyectos de ganadería extensiva. Situación que degeneró en una crisis de los derechos humanos en la región, razón por la cual comenzaron a aparecer iniciativas por parte de los pobladores en defensa del derecho a la vida. Para los años noventa la crisis en la que se hundió el agro colombiano afectó negativamente a los pequeños cultivadores de cereales en la región, razón por la cual el auge de los cultivos ilícitos se hizo mucho más evidente, sumado al hecho de que la compra de tierras a productores en crisis, así como el despojo sistemático, dio paso a una disputa territorial anunciada (Prada, p.175)

Ahora bien, el reclamo constante de la presencia del estado también hizo parte de la agenda contestataria de los pobladores de la región. A mediados de los años ochenta los habitantes del sur de Bolívar se movilaron en pro del reconocimiento por parte del gobierno central y regional de las necesidades que padecía la región. Las continuas marchas hacia Cartagena, la de 1985 y 1990, reclamaban la presencia del Estado a través de la prestación de servicios públicos básicos como educación, salud, acueducto y alcantarillado, construcción de infraestructura de comunicación con el resto del país.

Los primeros procesos organizativos que se dieron en la región se desarrollaron en torno a la satisfacción de necesidades básicas, alternativas de vida digna para la cual se organizaban comités cívicos, juntas de acción comunal, comités de mujeres, asociaciones de productores (MNV, p.22). Así, la población organizada en torno a juntas y asociaciones comunales procuró asegurarse la construcción de viviendas, calles, escuelas, ante el vacío de la presencia del Estado que solo ha manifestado a través de las fuerzas armadas con una iniciativa exclusivamente anti insurgente. Dentro de las asociaciones populares más significativas se destacó la *Asociación Municipal de usuarios San Pablo*, que agrupaba en torno suyo múltiples Asociaciones y agrupaciones de distintos corregimientos. Integrada esta última a la regional de la ANUC del Magdalena medio, *Asociación de Usuarios Campesinos – Unidad y Reconstrucción* (ANUC – UR), que tenía su sede en Barrancabermeja, y con

importancia en todo el Magdalena Medio, y unida a otras organizaciones como el *Movimiento A Luchar*, organizaron movilizaciones como el paro de Nororiente. Definiéndose como un movimiento:

“social y popular, que aglutina a pequeños y medianos propietarios/as, campesinos/as sin tierra, aparceros, mineros, colonos, pescadores/as, artesanos/as, colombianos/as, mujeres, jóvenes y hombres que desarrollan sus dinámicas organizativas en la perspectiva de la gestión y autogestión de alternativas socioeconómicas, políticas y culturales que contribuyan a la construcción de una vida digna para el sector campesino y el país”<sup>25</sup>,

se han movilizado exigiendo un posicionamiento del sector campesino dentro y fuera del país, el derecho a la autodeterminación, el derecho a la tierra, al agua, así como el respeto y la exigibilidad jurídica y política de los derechos humanos.

Todos estos movimientos serán un preámbulo de la *Asociación minera de San Pablo y Simití*. La organización FEDEAGROMISBOL, que agrupa a productores agrícolas del sur de Bolívar, nació a mediados de la década del noventa bajo el nombre *Asociación de comités agromineros del Sur de Bolívar* ASOAGROMISBOL, buscando hacerle frente a la crisis que atravesaban los mineros y agricultores de la región, demandando mejores garantías para la producción y mercadeo de sus productos, así como enfrentando a multinacionales que buscan apoderarse de la riqueza aurífera de la región. La Federación protagonizó las movilizaciones más importantes de la región, la de 1996 a Cartagena, la de 1997 a San pablo, y el éxodo Campesino a de 1998, en pro de las necesidades básicas de los pobladores y el respeto de sus derechos fundamentales. En la marcha que iniciaron en 1996 hacia Magangue y Cartagena expresaba la organización:

“solidaridad con los campesinos del sur del país y rechazo de la solución militar a un problema eminentemente social (...) exige la construcción y dotación de puestos de salud (...) así como también pide la construcción de escuelas y colegios, créditos blandos para campesinos y mineros, políticas de comercialización de los productos agrícolas, y soluciones alternativas a los

---

<sup>25</sup> Disponible en: [http://planetapaz.org/index.php?option=com\\_content&view=article&id=146:anuc-ur-el-desafio-historico-de-re-pensar-al-campesinado&catid=59:noticias-del-conflicto](http://planetapaz.org/index.php?option=com_content&view=article&id=146:anuc-ur-el-desafio-historico-de-re-pensar-al-campesinado&catid=59:noticias-del-conflicto)

cultivos ilícitos. Otra petición se relaciona por el respeto de los derechos humanos”<sup>26</sup>

Significativa ha sido también la actuación de la *Mesa Regional de Trabajo Permanente por la Paz en el Magdalena Medio*, organización que nace como producto de los acuerdos que firma el éxodo campesino con el Presidente Pastrana el 4 de Octubre de 1998 para garantizar el retorno y permanencia en las tierras abandonadas. Dentro de su agenda se destacan funciones de control frente al cumplimiento de los acuerdos que se celebraron con el Gobierno Nacional, así como la de elaborar el Plan Integral de Desarrollo de la Región en pro de la satisfacción de las necesidades básicas, la defensa de la vida y la integridad. En ese sentido ha ejercido labores de denuncia en cuanto a violaciones de derechos humanos como asesinatos selectivos, masacres y desapariciones forzadas, así como frente a los desplazamientos que han generado las acciones del gobierno a través de la implementación del Plan Colombia. En su momento en el 2002 hicieron también una fuerte denuncia acusando al gobierno y al paramilitarismo, aunados en ASOCIPAZ, de haber socavado los cimientos del proceso de diálogo que se instalaría con el ELN en la región<sup>27</sup>.

Sin el ánimo de puntualizar las agendas específicas de cada una de la organizaciones sociales que han impulsado los pobladores del Sur de Bolívar, sus iniciativas han perseguido la defensa de derechos sociales y políticos de los pobladores ante el abandono estatal, propuestas de desarrollo alternativo ante los intereses hegemónicos de industriales del agro y la minería, así como la férrea defensa de los derechos humanos ante las arremetidas del paramilitarismo. Así lo expresa por ejemplo la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra (ACVC) que agrupa 120 juntas de acción de la región, entre ellas varias de San Pablo y diferentes corregimientos de todo el Magdalena Medio, en regiones donde el INCORA adjudicó tierras así como declaró tierras baldías:

---

<sup>26</sup> Disponible en: <http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-490712>

<sup>27</sup> Cfr. Documento de denuncia presentado en la Habana Cuba por parte de la Mesa Regional de Trabajo Permanente por la Paz en el Magdalena Medio, 29-31 de enero de 2002.

“la ACVC es una organización de campesinos desplazados durante décadas a estos territorios de colonización producto de la violencia del paramilitarismo de Estado. El campesinado de la ACVC se ha organizado para resistir social, políticamente y desde la civilidad a los permanente embates de los partidarios de un modelo de desarrollo autoritario y excluyente en la región, este proyecto fascista ha asesinado, expropiado violentamente y desplazado a decenas de miles de campesinos y pobladores urbanos del Magdalena medio”<sup>28</sup>

### 2.1.3 La Agenda Subversiva: ELN

Históricamente tanto el ELN como las FARC han jugado un papel fundamental en la construcción social y política de la región. Bien porque su entrada y asentamiento en la región se hizo de manera muy temprana, a finales de la década del sesenta, razón por la cual han intermediado en los procesos de colonización de la región como árbitros de los conflictos particulares que se generaban entre los colonos, a través de un uso coercitivo de la autoridad ante la inexistencia del Estado en la región. Desde principios de la década del setenta el ELN se ha hecho presente en la región, inicialmente a través del frente “José Antonio Galán” al mando de Fabio Vázquez, y al final de la década por medio de otro comando liderado por el legendario Manuel Pérez. En la década del ochenta se visibiliza un asentamiento en la región a través de los frentes “José Solano Sepúlveda” y “Héroes de Santa Rosa”. Respecto a las FARC, a pesar de que “esta guerrilla no ha tenido una fuerte presencia en el departamento” (Arias, p.6), este grupo armado se ha visto favorecido por el debilitamiento del ELN ante la incursión paramilitar en 1997, y ha hecho presencia en la región a través del frente 24 en municipios como Simití, morales, San Pablo, Cantagallo, Santa Rosa y Monte Cristo.

Si bien en un primer momento la insurgencia en la región hizo presencia en las zonas de retaguardia campesina, sirviendo a los intereses de los colonos y organizando a la población en torno a la agenda típicamente revolucionaria de los sesentas: apoyando sus luchas sociales, para la década del noventa se nota una evidente pérdida de

---

<sup>28</sup> ¿Qué es la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra? Disponible en: <http://www.prensarural.org/acvc/presentacion2009.pdf>

capital social motivada por un énfasis en la agenda militar sobre la política, unida a la arremetida paramilitar que diezmó su poder político. La descripción que intentaremos de la agenda de la insurgencia se enfocará mucho más hacia el ELN, debido a que son las conversaciones con este grupo insurgente bajo el Gobierno Pastrana las que desatan las movilizaciones de ASOCIPAZ que han impulsado los cuestionamientos de esta investigación.

La agenda que el ELN ha liderado en la región se puede determinar a partir de la concepción estratégica que tiene como organización armada a partir de lo que Peñate (1998) ha denominado como “clientelismo armado”, así como la posición que como organización armada ha sostenido respecto a los cultivos ilícitos y el tráfico de estupefacientes. Sin embargo, dicha estrategia o agenda no apareció acabada desde los inicios de esta organización armada, más bien ha sido fruto de la trayectoria que ha recorrido dicho grupo insurgente, así como de las contingencias a las que se ha enfrentado.

En sus orígenes a partir de la Brigada José Antonio Galán en la Habana en 1962, en pleno contexto internacional de la confrontación Este-Oeste, el ELN al establecerse en San Vicente de Chucurí (Santander) consideró fundamental la relación con la Cuba socialista de Fidel Castro como un contacto importante para legitimar internacionalmente su lucha armada. De esa relación provino la estrategia “foquista”, de inspiración guevarista, que orientó la agenda del incipiente Ejército de Liberación Nacional en la guerra de guerrillas para: “la obtención del poder por las clases populares y la derrota de la oligarquía nacional, de las Fuerzas Armadas que las sostienen y de los intereses económicos, políticos y militares del imperialismo norteamericano” (Peñate, 1998, 8). No obstante, las limitaciones de esta estrategia netamente militarista prontamente se hicieron evidentes. Ante un ejército en constante aumento, y simplemente ocupado de elaborar golpes y emboscadas esporádicas a objetivos militares y de policía, el ELN se resolvió a responder al problema de financiación de sus tropas a partir de la concepción romántica que espera el sustento del apoyo de los campesinos que habitan en sus zonas de influencia. Sin embargo,

rápidamente se genera un desencanto en la población campesina que lo máximo que recibe del grupo insurgente son unos títulos denominados “Bonos de Esperanza Revolucionaria”<sup>29</sup> ante el desfallo de sus despensas. Por otra parte los desencuentros armados de Anorí significaron también un duro revés para el ELN en el terreno militar. El Estado emprendió una campaña militar en contra de los “elenos” que rápidamente se tradujo en desencanto al interior de sus tropas, así como un espíritu revisionista de la estrategia “foquista” al interior de sus filas: “en 1974, solo en un año, el ELN pasó de 270 guerrilleros a menos de 70”<sup>30</sup>.

Así las cosas el ELN se sumió en un período de crisis, marcado por la presencia de diversas divisiones internas entre aquellos que defendían la línea oficialista que tenía en el “foquismo” su idea principal, y los que pedían un replanteamiento de la estrategia de lucha a través de una vinculación más estrecha con sindicatos y movimientos sociales, aumentando de esa manera la base social del ejército insurgente. Entre estos últimos se contaban cuadros provenientes de centros urbanos, como es el caso de militantes que provenían de FECODE (Federación Colombiana de Educadores). También dentro de esta crisis se puede resaltar el éxodo de su comandante Fabio Vásquez a Cuba en búsqueda de respaldo militar, lo cual redundó en una ausencia real de poder al interior de la organización, así como se generaron una serie de desconfianzas que redundaron en el fusilamiento de varios guerrilleros por acusaciones de traición. De todas estas crisis el ELN se vió volcado a una reformulación de su estrategia, haciendo un énfasis especial en la necesidad que tiene la lucha guerrillera de establecer relaciones o alianzas con la población local no solo a través de medios armados sino sobre todo políticos. Palabras más o palabras menos, la lucha guerrillera no se da solo en el terreno militar sino también en el espacio social constituyendo bases de apoyo que vinculen al grupo armado con la población. De otra manera, si se tiene en cuenta a la población solo para el abastecimiento material de la lucha armada

---

<sup>29</sup> Se trataba de unos bonos al portador que podrían hacer efectivos los campesinos una vez la revolución triunfara.

<sup>30</sup> MEDINA GALLEGU, CARLOS, *Violencia y lucha armada: el caso del ELN. Una historia de Vida (1963-1978)*, Tesis de Grado, Departamento de Historia, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá. Citado por: Peñate, 1998, p. 13.

guerrillera, recostándose en la producción campesina, la causa insurgente es frágil. Luego, los “elenos” se hicieron conscientes de la necesidad de buscar formas de financiación distintas que no afectaran negativamente al grueso de la población donde podrían encontrar apoyo: el secuestro así como la extorsión del sector energético comenzarán a hacer parte de los objetivos de la lucha armada.

Ahora bien, es a principios de la década de los ochenta que el Frente “Domingo Laín” pondría en práctica la nueva estrategia o agenda insurgente. Ubicándose en el piedemonte llanero de la selva del Sarare el frente “Domingo Laín” comenzó a operar a través de secuestros a ganaderos colombianos y venezolanos, sin suscitar una reacción del Estado colombiano que se ocupaba en ese entonces de contener las mafias “marimberas” del norte del país así como al M-19. Por supuesto la actividad extorsiva del “Domingo Laín” redundó en beneficio de las finanzas de toda la organización. Sin embargo, la verdadera importancia de este frente para la organización “elena” en general se dio una vez entraron en competencia con las FARC por ser la retaguardia de los colonos de la región. Es decir, las FARC desde principios de los ochenta se habían expandido de las zonas andinas hacia las fronteras de colonización, pasando de 7 frentes en 1978 a 38 en 1989, y de esa manera convirtiéndose en auspiciadoras de la colonización campesina. En este proceso, las FARC pusieron sus armas al servicio de los colonos para presionar a través de la coerción armada a la asignación de recursos públicos hacia las veredas y caseríos afables. Es así como se encuentra que en Arauca las FARC a través del frente “Guadalupe Salcedo” implementaron un clientelismo respaldado en las armas como cualquier barón electoral, facilitando atajos en la asignación de recursos públicos a través de la intimidación armada a los funcionarios del Estado. Todo esto terminó en que rápidamente los votos por el partido Conservador y el Liberal fueron reemplazados por un apoyo significativo a las listas de la Unión Patriótica (UP), y unido este fenómeno a la descentralización política fomentada a partir de la elección popular de alcaldes, significó al posibilidad de que las FARC cooptaran un capital político que

redundaría en alcaldías afables a su propuesta política. Sin embargo, como señala Peñate:

“muchos políticos independientes del Sarare temerosos de que las FARC optaran por un control electoral total de la zona, buscaron a los elenos del “Domingo Lain” y les propusieron una alianza para prevenir que las FARC actuaran contra sus candidatos, líderes de base o juntas de acción comunal en las siguientes elecciones municipales en 1988 (...) La competencia entre las FARC y el “Domingo Laín” hizo que el Sarare se convirtiera en la región del país donde se produjeron más paros cívicos en todo el gobierno de Barco” (1998, pp.22-23).

Una vez establecido el dispositivo clientelista, en conjunto con las FARC, el “Domingo Lain” logró un entronque con la población que le permitirá acceder a recursos públicos inmensos, sobre todo una vez se descubre el campo petrolero de Caño Limón. En este caso puntual la elaboración del poliducto que extraería el producto de los campos petroleros, se constituyó en la oportunidad perfecta para que el ELN intermediara por recursos y proyectos para las comunidades por donde pasaba el proyecto. En ese sentido no solo los “elenos” acumularon un capital político considerable al intermediar por las necesidades de la población que eran atravesadas por el proyecto, sino a la vez obtuvieron jugosas rentas con tal de dejar explotar sin inconvenientes de orden público lo que en su momento se veía como el mayor campo petrolero descubierto en Colombia. Así nació la agenda estratégica del ELN, que ya no solo sustentaba la lucha armada a través de secuestros y extorsiones, sino a la vez se inició en el acceso e intermediación de recursos públicos y privados por medio de la coerción armada, en lo que ellos denominarán “regiones estratégicas”. Afirmaba la Revista Semana en 1998 respecto a este nuevo actuar del ELN:

“consiste en obtener recursos económicos con base en la extorsión de compañías petroleras, invocando la lucha contra el imperialismo y las multinacionales. Este sistema surgió hace 4 años con el secuestro de Werner Shoost, un ingeniero de la empresa alemana Manessmann, que junto con la italiana Sicim, fueron contratadas para construir el oleoducto Caño Limón-Coveñas. En esos días, se afirmó con insistencia que por el rescate del técnico alemán se había pagado una suma cercana a los 2 millones de dólares. Aunque esto es muy difícil de establecer a ciencia cierta, lo que sí quedó claro es que a

partir de entonces se inició una serie de negociaciones entre la Manessmann y el ELN, que culminaron con exigencias del grupo guerrillero como la realización de obras sociales en materia de educación, salud, vías de comunicación, acueductos y alcantarillados, en las comunidades de la zona donde las petroleras y sus contratistas comenzaban a trabajar<sup>31</sup>.

Sobre la necesidad de crear vínculos con la población afirmaba en una entrevista el comandante Felipe:

“estamos tratando de ubicar a las masas en el centro de nuestra preocupación y en el centro de nuestro proyecto y queremos definirlo desde ahí. Por supuesto, manteniendo firmemente lo que ha sido nuestra proyección y nuestra historia, el proyecto de la toma del poder por la vía armada. Y hoy tenemos condiciones de hacer eso y empezar a manejar mejor las coyunturas desde el punto de vista político, levantando propuestas políticas más cercanas a la gente” (Harnecker, 1988, p.41) .

Ahora bien, teniendo en cuenta el tema de los cultivos ilícitos y el tráfico de drogas, el ELN ha oscilado entre una posición negativa, llegando incluso a promover campañas de erradicación voluntaria, hasta la revalorización de los recursos provenientes del narcotráfico en vista de su fortalecimiento militar. A diferencia de las FARC, el ELN ha sostenido que el narcotráfico ha introducido la corrupción y la impunidad dentro del Estado, apoderándose de este último y de la vida social, a través de la introducción de la cultura de la riqueza adquirida de manera fácil que trastornó los valores de la sociedad<sup>32</sup>. Incluso, en las negociaciones de paz que adelantó el ELN con el gobierno Pastrana, se tenía la intención de tratar en la “Convención Nacional”, la puesta en marcha de un programa alternativo de desarrollo que permitiera la inversión en la región, y a la vez proponía la erradicación voluntaria de cultivos ilícitos.

Respecto a esta propuesta política del ELN acerca de los cultivos ilícitos hay quienes reconocen en este caso el interés por parte de la organización insurgente por figurar en temas de debate, de tal manera que puedan darle visibilidad nacional como internacional. Al respecto afirma Peñate que desde la muerte de Camilo Torres el ELN

---

<sup>31</sup> Revista Semana, lunes 28 de Marzo de 1988. Disponible en: <http://www.semana.com/especiales/petroterrorismo-del-eln/24750-3.aspx>

<sup>32</sup> Documento del ELN, “La paz y las causas del conflicto armado”, sin fecha ni referencia de edición.

descubrió como parte fundamental de su agenda la importancia de la figuración pública: “ha buscado siempre ganar, conservar o ampliar (según sea el caso) un lugar en la discusión de los asuntos importantes del país” (1998,9). Ya se han visto a lo largo de su historia como este interés de figuración se ha desarrollado, como sucedió en los diálogos de Caracas y Talaxcala en 1991 y 1992 donde tomaba posición respecto a temas como la “apertura económica” o la política nacional petrolera.

Toda esta inserción social y espacial de las guerrillas en los territorios de colonización campesina, causó una serie de coincidencias de intereses políticos que han llevado a que este sector social sea acusado y perseguido por la violencia estatal y paramilitar, en una indistinción entre la lucha social legal e ilegal.

#### **2.1.4 La Agenda Paramilitar**

Como bien lo señala Salgado (2002, p.13), “el ejercicio privado de la justicia y la violencia ha sido un fenómeno que ha acompañado la historia agraria de Colombia”. Es decir, ya sea por ausentismo, tolerancia, o incapacidad del Estado para garantizar seguridad, se han creado grupos o ejércitos privados, que muchas veces no solo han tenido una finalidad contrainsurgente, sino a la vez cierto contra reformismo agrario que ha tendido a favorecer a hacendados y terratenientes en detrimento de los intereses campesinos. Pero también el campo ha estado sujeto a las dinámicas propias de la criminalidad que ha elegido la frontera agraria para la explotación de mercados ilícitos, como es el caso del narcotráfico. Por lo tanto el fenómeno del paramilitarismo ha estado sujeto también a las dinámicas de la criminalidad organizada como es el caso de la influencia que los carteles narcotraficantes han ejercido sobre el paramilitarismo en el país. En ese sentido, a pesar de que la evolución histórica de fenómeno paramilitar en el país ha obedecido una dinámica que pasa por la institución de organizaciones de autodefensa de carácter local, hasta la consolidación del proyecto paramilitar a nivel nacional como se evidenció en el caso de las AUC, el paramilitarismo es un fenómeno complejo que con dificultad puede ser reducido a la

dualidad entre “autodefensas” y “paramilitares”, como muchos estudios lo han presentado a partir de la distinción analítica elaborada por Romero (Cfr. 2003, p.38)<sup>33</sup>.

Ahora bien, en vista que pretendemos determinar la agenda que llevo a cabo el paramilitarismo en el contexto de la ocupación del sur de Bolívar (1997-2002), se hace necesario hacer una breve ubicación sincrónica de este fenómeno complejo que ha cambiado con el paso del tiempo. Juan Carlos Garzón (2005), consciente de la complejidad del fenómeno ha elaborado una lectura sincrónica a partir del concepto de “ruptura”, tratando así de evaluar cambios determinantes en la estrategia paramilitar a nivel nacional que determinarán su curso de acción, o como lo hemos llamado acá, su agenda.

Los ejércitos privados de autodefensa que surgieron inicialmente en el campo colombiano podrían denominarse “vigilantes”, acogiendo la tipología que Kalyvas (2005) ha elaborado para la comprensión del fenómeno paramilitar. Se trata de pequeños grupos constituidos por civiles que actuando localmente, y motivados por intereses privados, dedican una parte de su tiempo a hacer cumplir las normas sociales o controlar el crimen. En el caso colombiano grupos de este tipo surgieron a principios de los años setenta en Boyacá; su función puntual era garantizar la explotación de las esmeraldas, liberando la región de delincuentes y otros actores que perturbaran la explotación. Por supuesto grupos de “vigilantes” también se establecieron en muchas otras partes, particularmente en zonas de explotación ganadera, pues lo que se buscaba era la protección de los propietarios de la extorsión guerrillera, así como garantizar la continua explotación económica del campo. En el caso puntual de los grupos de “vigilantes”, su agenda si bien oscila entre la defensa de la propiedad privada de los abusos de la insurgencia y en algunos casos asegurar la hegemonía de hacendados y mafiosos en la tenencia de sus tierras contra las demandas de campesinos y desterrados, prima ante todo el interés por proveerse de

---

<sup>33</sup> Romero señala que mientras en los grupos de autodefensa se expresa la iniciativa de hacendados, terratenientes, mafiosos y comerciantes, por defenderse de las acciones de la insurgencia a través de grupos de civiles armados, constituidos en muchos casos con ayuda o tolerancia del Estado, el paramilitarismo tiene una finalidad ofensiva, de consolidación militar y política a través de ejércitos armados.

seguridad, de auto defenderse de los abusos de la guerrilla y la criminalidad que azotaban el campo ante la desprotección del Estado. Por supuesto, la temprana intervención de intereses narcotraficantes en la constitución de estos grupos incidió también en la orientación de sus agendas. Muchos grupos armados locales se dedicaron a la protección de laboratorios, cultivos ilícitos y rutas, o apropiación de tierras como sucedió en Boyacá una vez Rodríguez Gacha incursiona en el Magdalena Medio.

Muchos de estos grupos gozaron de legitimidad en los setentas cuando a través del decreto 3398, que luego se formalizaría en la ley 48 de 1968, el gobierno no sólo formalizó los grupos armados de civiles que existían en las regiones, sino que promovió su constitución con apoyo de las fuerzas armadas en aras de la seguridad nacional, auspiciado en la Doctrina anticomunista que se promovía desde el Pentágono. Ya no se tratará de simples “vigilantes”, sino de “guardianes locales” que como estrategia gubernamental no sólo tienen una finalidad militar sino política, a favor de la construcción del Estado y el control de la población (Kalyvas, 2005, p.33). No obstante, no sólo estos grupos armados con el apoyo estatal contuvieron la expansión de la insurgencia, pues en muchas regiones elites ganaderas y terratenientes atacaron la protesta social que demandaba la posesión de la tierra, como es el caso de ANUC, a través de la criminalización de la movilización o de la demanda de derechos. En ese sentido la agenda del paramilitarismo a inicios de los años ochenta tiene un carácter doble. Primero, uno eminentemente regional y motivado por intereses privados, en tanto obedece a los intereses de las clases latifundistas y mafiosas que operan en cada uno de los lugares, asegurando la conservación del *statu quo*. Y segundo, se trata de una agenda de carácter nacional que alcanza los intereses de la política estatal. Efectivamente, al ver el Estado que en la promoción de ejércitos privados podría sustentar una estrategia de contención de la insurgencia, el paramilitarismo entró en una ambigüedad compleja que mezclaba la defensa del Estado y a la vez garantizaba intereses locales muchas veces asociados a la criminalidad.

Sin embargo, a principios de los años ochenta, en un contexto de inversión de los dineros del narcotráfico en propiedades rurales<sup>34</sup>, se generará una “ruptura”<sup>35</sup> al interior del paramilitarismo que reorientará su estrategia y agenda. Tanto el secuestro de Martha Nieves Ochoa por parte del M19, así como el escalonamiento en las violaciones de derechos humanos en todo el país suscitarán un distanciamiento del Estado así como una oposición radical contra la insurgencia. El secuestro de la hermana de los Ochoa, miembros del Cartel de Medellín, generó la aparición del grupo “Muerte a Secuestradores” (MAS) que rompería definitivamente las relaciones entre la insurgencia y el narcotráfico, que ya se venían minando por el continuo cobro de impuestos que la insurgencia imponía a la comercialización y producción de la droga. En ese contexto Rodríguez Gacha extendió el poder del MAS a nivel nacional llevando su accionar al Meta y al Caquetá, y a través de alianzas con otros miembros del Cartel de Medellín, al Magdalena Medio, Urabá y los santanderes. Al iniciar esta ofensiva nacional y su consecuente expansión, los grupos de autodefensa tuvieron un carácter más ofensivo y en consecuencia más acorde al actuar paramilitar. Por supuesto esta coyuntura fue favorecida también por la política de paz del presidente Barco que al acordar una tregua con las guerrillas favoreció su fortalecimiento. Así las cosas, el actuar del paramilitarismo se orientó hacia la protección de laboratorios, el enfrentamiento con la guerrilla, el asesinato sistemático de líderes de la UP y líderes populares, campañas de “limpieza social”, y en su última etapa la extorsión de ciudadanos con algún poder económico<sup>36</sup>. Así mismo, el narco-paramilitarismo incidió en el debilitamiento de las expresiones asociativas de la población en todo el país a través de violaciones de derechos humanos a sindicalistas, sectores campesinos y a la Unión Patriótica. La ofensiva paramilitar sobre muchas regiones incidió en el

---

<sup>34</sup> “Miguel Alfredo Maza Márquez, exdirector del DAS, en un informe presentado en el año de 1989 subrayó que a raíz de la aguda situación política y social que a principios de los ochenta vivió Panamá, se hizo efectivo el retiro de los depósitos bancarios allí consignados por los capos colombianos, para invertirlos principalmente en bienes raíces y en el sector primario de nuestra economía, particularmente el agropecuario” (Salgado, 2002, 15)

<sup>35</sup> Señala Garzón que el concepto de “ruptura” mas que generar un salto sin precedentes en términos cualitativos y cuantitativos, lo que señala es un momento histórico específico en el cual ya sea a partir de enfrentamientos o alianzas se da una variación significativa del fenómeno en términos estratégicos (2005, 55)

<sup>36</sup> COMISIÓN PARA LA SUPERACIÓN DE LA VIOLENCIA, *Pacificar la Paz, lo que no se ha negociado en los acuerdos de paz*, IEPRI-CINEP, Bogotá, p.49. Citado por Garzón, 2005, 58.

debilitamiento de las expresiones asociativas de la población, gracias a que se identificaba cierta empatía entre el discurso reivindicatorio de muchas asociaciones con los ideales que defendía la insurgencia. En este contexto se da el asesinato de los candidatos presidenciales Jaime Pardo Leal, Luis Carlos Galán, Bernardo Jaramillo y Carlos Pizarro, que van a llevar a que el gobierno reaccione frente al paramilitarismo eliminando los decretos que los habían llevado a la vida legal, estableciendo penas para toda persona que constituyera o favoreciera este tipo de grupos armados.

En el caso del Sur de Bolívar, como señalamos ya, diversas estructuras de autodefensa comenzaron a operar en la región a partir de la década de los ochenta, y su consolidación como ejército paramilitar se dará solo hasta finales de la década de los noventa. Entre los primeros grupos de autodefensa que operaron en la región a partir de la década del ochenta cuentan las Autodefensas del Bajo Cauca y Norte de Antioquia; el grupo Muerte a Secuestradores (Mas); las Autodefensas campesinas del Magdalena Medio de Ramón Isaza, así como las Autodefensas Unidas de Santander y Sur del Cesar (Ausac), a cargo de alias “Camilo Morantes”, quien se haría tristemente celebre por la masacre acontecida en Barrancabermeja en 1999. Se trató de grupos paramilitares fortalecidos por los grandes capitales generados por el narcotráfico, y que dotados de autonomía como ejércitos privados respecto al Estado aceleraron los procesos de expulsión de las guerrillas, así como de concentración y revalorización de la tierra.

Sin embargo, antes de la aparición de las AUC se precisarían dos “rupturas” más. Primero, la expansión de los ejércitos de autodefensa hacia regiones como el sur de Córdoba, Sucre, Urabá y el Bajo Cauca Antioqueño, propiciando las bases para la constitución de “Los Tangueros”, ejército de la familia Castaño que es el antecedente de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU), base de las futuras AUC. Segundo, la desaparición de Rodríguez Gacha y Pablo Escobar. El proyecto paramilitar implementado por los Castaño contó con el apoyo de los terratenientes y la clase política tradicional cordobesa, que cambió el destino de sus aportes de la “vacuna ganadera” exigida por la guerrilla, a los “aportes de seguridad”, creando de

esa manera alianzas con la sociedad regional en contra de toda influencia de la guerrilla a través de una “guerra sucia” fundada en masacres y asesinatos selectivos contra la sociedad (Cfr. Romero, 2003, p.128). Así mismo, la desaparición de Escobar como de Rodríguez Gacha dejó espacios para que se ampliaran los ejércitos de Víctor Carranza en el Meta, Casanare, Cesar y Arauca, pero también la muerte de los mencionados capos permitieron a los Castaño no solo una consolidación de su participación en el negocio del narcotráfico, sino a la vez expandirse hacia zonas de Córdoba, Antioquia, Urabá y Sucre (Garzón, 2005, p.65). Lo más importante de la expansión de la casa Castaño fue su incursión en 1995 en el eje bananero en Urabá, relegando a las FARC y al EPL hasta su desmovilización. Entonces se reactivan los antiguos “Tangueros”, que bajo la política de sometimiento a la justicia se habían entregado en 1991, pero ahora bajo la denominación Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) el proyecto paramilitar encuentra el beneplácito de las clases terratenientes, políticas e industriales, que ven en el ejército de los Castaño una garantía de seguridad. En ese sentido el proyecto paramilitar fue afable a los intereses de clases sociales poderosas que lo favorecieron, llegando al punto que para 1998 los ejércitos paramilitares vuelven a encontrar legitimación estatal bajo el decreto que le dio vida a las denominadas Convivir, cuerpos de vigilancia y seguridad privadas que promovieron y extendieron el paramilitarismo a nivel nacional:

“De acuerdo con un informe del Observatorio de Violencia de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, elaborado en 1998, en los once departamentos más afectados por el conflicto armado se registraban actividades paramilitares en el 70% de los municipios en los que fueron creadas las Convivir” (Garzón, 2005, p.66)

El proyecto paramilitar para 1997 reunía todas las condiciones para expandirse e integrarse a nivel nacional. Ante un cambio de estrategia de las FARC que significó la escalada de sus acciones, pues dejaría de esperar al enemigo para ir en su búsqueda, como señala Alfredo Rangel<sup>37</sup>, sectores sociales y políticos, así como las Fuerzas

---

<sup>37</sup> ALFREDO RANGEL, “Las FARC-EP: Una mirada actual”, en *Reconocer la guerra para construir la paz*, 1999, p.23. Citado por Garzón, 2005, 67.

militares, vieron en la alianza entre la sociedad y las autodefensas una manera eficaz de contener la insurgencia, tal y como se había evidenciado en el Urabá con las ACCU. Bajo la complicidad de sectores políticos y económicos se extendió el fenómeno paramilitar en el país; sectores de la sociedad no solo patrocinaron económicamente sus acciones, sino a la vez toleraron sus acciones violentas contra la población. El proyecto paramilitar, completamente tolerado por la sociedad, se multiplicó en varias regiones del país, buscando contener y expulsar a la insurgencia no tanto a través de una confrontación armada directa, sino a partir de un golpe a sus bases sociales a través de masacres y muertes selectivas.

Ahora bien, dentro de la agenda paramilitar de los noventa no solo se encontraba una motivación anti insurgente, pues la expansión de este fenómeno y el consecuente debilitamiento de la guerrilla requirieron de una guerra por la apropiación de las zonas dedicadas al cultivo y procesamiento de cultivos ilícitos. Con la persecución y eliminación de Pablo Escobar, y la desarticulación del Cartel de Medellín, así como luego sucederá lo mismo con el Cartel de Cali en 1995, la estructura del negocio del narcotráfico se modificó: “desapareció la integración vertical de la industria, que permitía a los carteles controlar desde el cultivo, el procesamiento hasta su distribución, para pasar a una nueva forma de organización en la cual el mercado se segmenta y ninguna organización domina más de una o dos partes del negocio, generando de esa manera una multiplicación de empresas dedicadas al narcotráfico” (Reyes, 2009, p.88). En este contexto aumentó el control de los cultivos por parte de las guerrillas, particularmente las FARC, aunque también los ejércitos de paramilitares sobrevivientes de la guerra entre el Estado y el narcotráfico lucharon por la captura de rentas, y la celebración de pactos con carteles mexicanos. Para 1994, Carlos Castaño reemplazó a su hermano Fidel en la dirección de las ACCU, y junto con Salvatore Mancuso, al frente del Bloque Bananero, creado por las ACCU, convocó en 1997 a los líderes de los grupos de autodefensa en el país a una federación nacional que denominó Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Una estructura armada de carácter nacional, dividida en cinco frentes, tres de los cuales actuaban en Antioquia

(Bloque Metro, Bloque Urabá, Bloque Minero), mientras los otros dos operarían en la Costa Atlántica y en el Magdalena Medio; Bloque Norte y Bloque Central, respectivamente.

La incursión de las AUC en el sur de Bolívar se da hasta 1997, después de que en la tercera cumbre de las autodefensas se declarará objetivo militar tanto Barrancabermeja como el sur de Bolívar. Decisión que según las versiones libres de “Julián Bolívar” ante Justicia y Paz le fue encomendada por Castaño, en coordinación con las autodefensas de Santander y César, y que inició en Barranco Lebrija, corregimiento de San Martín (Cesár), y el 11 de junio de 1998 comenzaron a movilizarse hacia Cerro Burgos, un punto estratégico para entrar a la región. Su presencia en el territorio del sur de Bolívar no solo obedece a una decisión estratégica, consolidar un corredor que una a Urabá con el Catatumbo, sino a la vez consolidarse en territorios de vital importancia militar y económica para el país como lo son la Sierra Nevada de Santa Marta, la Serranía del Perijá y la Serranía de San Lucas (MNV, p.18).

Como lo señalamos ya la primera incursión estuvo al mando de las ACCU, aunque posteriormente debido a una reorganización del paramilitarismo en el país, la zona quedó bajo el dominio del Bloque Central Bolívar, una filial de las AUC, reconocida por ser la estructura paramilitar más grande del país con presencia nacional.

<b>BLOQUE<sup>38</sup></b>	<b>MUNICIPIO</b>
BLOQUE CENTRAL BOLÍVAR (Frente Sur de Bolívar)	San Pablo, Santa Rosa, Simití, Morales, Rio Viejo, Arenal, Montecristo y Cantagallo
Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU)	Rioviejo
Salvatore Mancuso y Popeye	Simití

<sup>38</sup> Movimiento Nacional de Víctimas, p.19.

Autodefensas de Botero	Tiquisio
------------------------	----------

Ahora bien, la incursión paramilitar en el sur de Bolívar no solo tuvo como objetivo la ocupación de zonas antes dominadas por la insurgencia. En muchos casos se evidenció un uso de la fuerza en pro de la frustración de procesos populares de organización, como sucedió con múltiples cooperativas mineras y campesinas que se habían creado en defensa de los derechos de los pobladores. Prueba de ello es el asesinato en 1997 del vicepresidente de FEDEAGROMISBOL, el presidente del Comité de mineros de Rio Viejo y de más de 30 mineros a manos de las AUC (MNV, p.18). Todos los pobladores, campesinos como mineros, que hacían parte de estas cooperativas y asociaciones, fueron acusados de ser colaboradores de la guerrilla por defender su derecho a la posesión y explotación de minas y tierras.

## **2. Lógicas de la violencia en el Sur de Bolívar**

En este aparte, después de haber esbozado las agendas que se disputan la construcción del territorio, pretendemos describir las dinámicas violentas que se han desarrollado entre los actores armados en aras a señalar la hegemonía de la agenda paramilitar al finalizar el siglo XX. Sin embargo, no se debe olvidar la perspectiva que hemos desarrollado desde inicios de este estudio, y es la comprensión del actuar de los distintos actores en un contexto de región en construcción. Con este objeto, contamos con el registro cuantitativo que el Centro de Recursos para Análisis de Conflictos (CERAC) ha elaborado respecto a las acciones violentas que se han desarrollado en el país desde 1988 a 2009, así como de los registros que ha recopilado el proyecto Colombia Nunca Más (CNM) respecto a violaciones de derechos humanos en el Sur de Bolívar. Acogiendo nuestro interés los siguientes gráficos comparativos solo se centran en el departamento de Bolívar, así como en el periodo de 1988 a 2006, año del término del primer mandato del gobierno Uribe, reconocido por la implementación de la política de seguridad democrática en todo el país: proceso de paz con el paramilitarismo, así como una ofensiva contra las organizaciones insurgentes.

En el capítulo anterior a partir de una definición de Kalyvas habíamos tipificado el conflicto armado en el Sur de Bolívar como una Guerra Civil, entendida esta como “el combate armado dentro de los límites de una entidad soberana reconocida, entre partes sujetas a una autoridad común al comienzo de las hostilidades” (2010, p.35). Se trata de una definición absolutamente carente de explicaciones, razones o causas que hayan dado origen la guerra. A lo sumo se centra en una característica esencial del conflicto y es la “soberanía escindida”, objeto de la lucha entre los actores armados. Por eso el conflicto no se centra simplemente en la ocupación del territorio, como sucedería en una guerra convencional, pues se exige la construcción de soberanía a través de acciones violentas coercitivas que modifiquen las lealtades de la población. Luego, cabría de esperarse que el número de combates entre los distintos ejércitos que se disputan la soberanía sea inferior al número de acciones armadas. Por eso, como lo evidencia el Gráfico 1, que señala comparativamente el número de “Eventos”<sup>39</sup> así como de “Combates”<sup>40</sup> que ha habido en el departamento de Bolívar de 1998 a 2006, las dinámicas armadas que se han desplegado en la región lejos de señalar la existencia de un conflicto regular en el cual los combates entre los distintos ejércitos abundan, lo que se evidencia es que los eventos de la guerra superan por completo el número de combates que se han implementado en la región. Se trata entonces de una guerra irregular, en la cual el combate entre los actores armados es inferior al número de eventos conflictivos. Como se evidencia en la gráfica hay dos picos pronunciados de eventos violentos: 1997 y 2004. Mientras el primero se corresponde a la incursión de las AUC en el sur de Bolívar, lo cual significó un ataque frontal por parte del paramilitarismo contra la población civil, como lo señalaremos de forma más específica posteriormente, en el 2004 encontramos un aumento de las operaciones militares en la región lideradas por la Fuerza Pública en lo que se

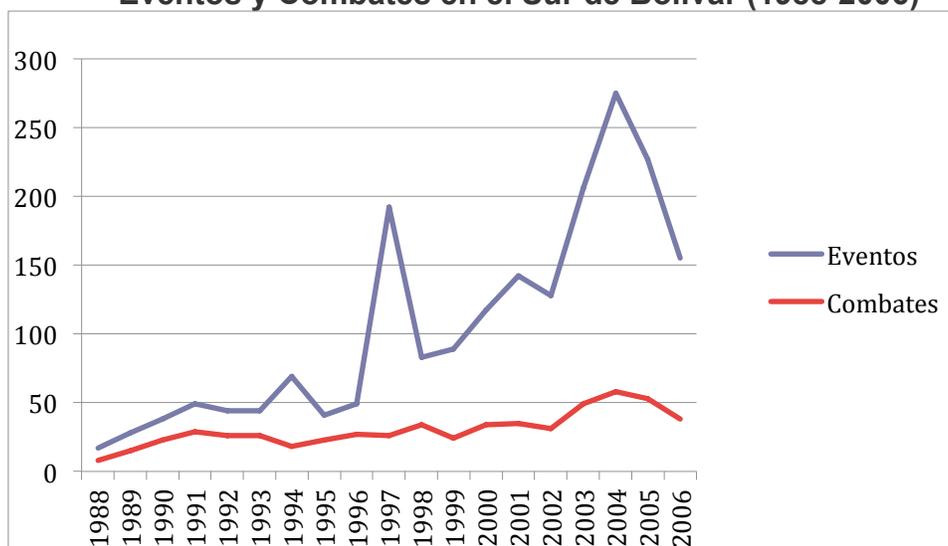
---

<sup>39</sup> CERAC tipifica el “evento” de la siguiente manera: “el evento tiene gran importancia metodológica pues constituye su unidad de análisis. Dos condiciones deben cumplirse para que CERAC califique como evento a un suceso: primero, debe partir de un hecho de violencia que coincida con las definiciones y la tipologías antes mencionadas, y segundo, el evento debe ser reportado por una o varias fuentes de información”.

<sup>40</sup> “Todo enfrentamiento armado o cruce entre dos o más grupos. Siguiendo la definición usada por el Centre for the Study of Civil War (CSCW), es necesario que durante la acción el perpetrador se enfrente a una reacción defensiva del grupo que está siendo atacado, de no ser así se trata de una acción unilateral”.

denominó como Operación Bolívar. Ofensiva de la fuerza pública contra el paramilitarismo, la insurgencia y las mafias, con el fin de dismantelar cultivos ilícitos, laboratorios, sobre todo estructuras dispuestas para el tráfico de narcóticos.

**Grafico 1**  
**Eventos y Combates en el Sur de Bolívar (1988-2006)<sup>41</sup>**

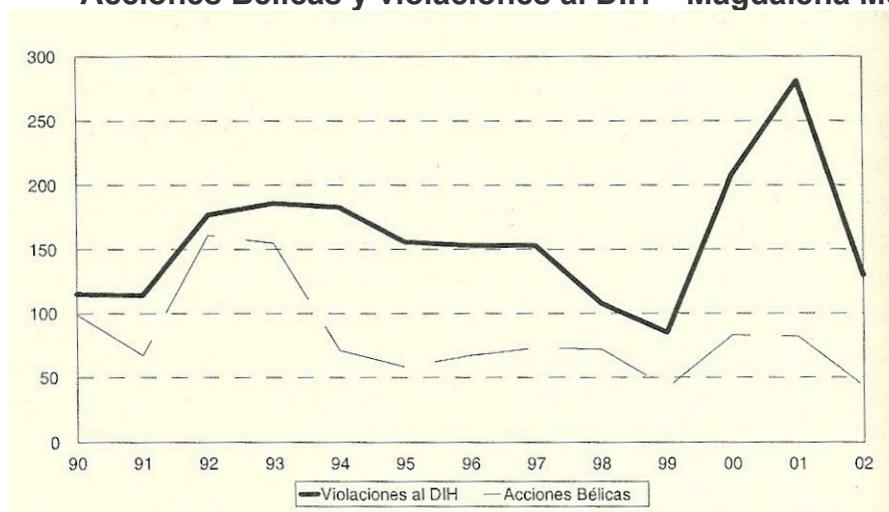


De una manera mucho más específica, Vásquez (2006, p.346) ha señalado que de 1990 a 2002 en el Magdalena Medio hubo un mayor número de violaciones de derechos humanos, es decir ataques contra la población civil, que acciones bélicas como combates entre los distintos grupos armados. Todo ello indica que la población ha sido el principal objeto de las acciones armadas en la región, el centro de disputa y botín que se libra en la guerra, entendiendo todo esto como un conflicto en pro de la constitución de una soberanía a partir de la configuración de la lealtad de los pobladores. Ahora bien, en la medida en que Vásquez fundamenta sus análisis en las estadísticas del *Banco de datos de violencia política y derechos humanos* del Cinep, y este entiende la violación al DIH como toda acción violenta que se aparta de las normas que regulan los conflictos armados, o sea el ataque contra todas las personas que estén fuera de combate así como las que no participan directamente de las

<sup>41</sup> A no ser que se señale algo distinto, este gráfico y otros, son de elaboración propia y elaborados a partir de una discriminación de los datos nacionales que posee CERAC respecto al conflicto armado en el país.

hostilidades, se trata en los términos de Kalyvas de una preeminencia de violencia coercitiva sobre la población, sin que podamos discriminar hasta el momento si se trata de selectiva o indiscriminada.

**Grafico 2**  
**Acciones Bélicas y violaciones al DIH – Magdalena Medio<sup>42</sup>**

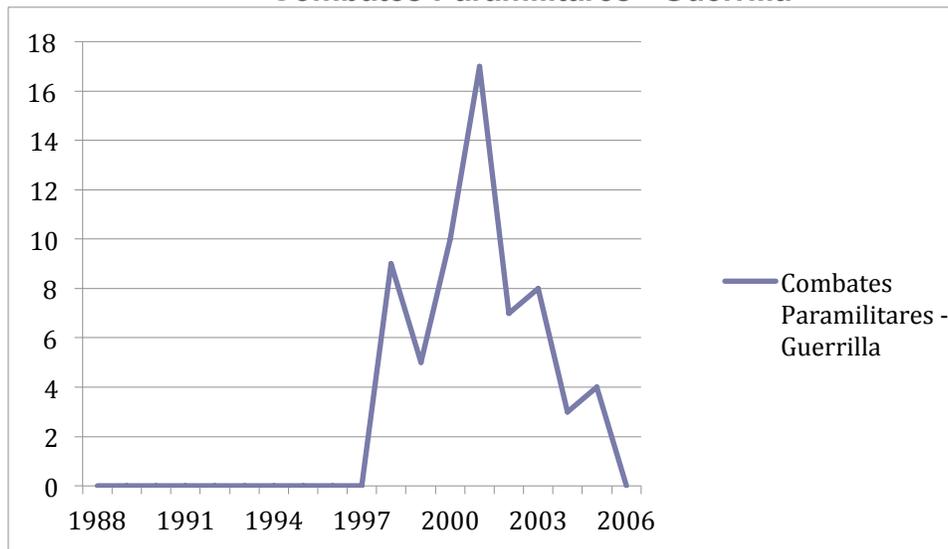


Como habíamos señalado ya, la guerrilla estratégicamente a final de los setentas pasó de ocupar las zonas de retaguardia campesina, así como de migración de colonos, para insertarse luego en zonas de mayor desarrollo, más vinculadas con el mercado nacional, así como ya bajo el dominio de los partidos tradicionales. Todo esto ocasionó en los años ochenta la reacción de los primeros grupos paramilitares en la región, que buscaron despojar a la insurgencia de áreas productivas del Magdalena Medio, particularmente zonas del margen oriental del río como Puerto Boyacá, Cimitarra, Sabana de Torres, Aguachica, y por supuesto Barrancabermeja. Sin embargo es hasta 1997 que el paramilitarismo, ya organizado bajo las AUC, incursiona decididamente en el Sur de Bolívar con la iniciativa de despojar al ELN y las FARC del dominio político y económico que tienen en la región. Así como lo señala el siguiente gráfico es a partir de 1997 que se escala el conflicto en la región una vez incursionan las AUC, con un

<sup>42</sup> Tomado de Vásquez, 2006, p. 346.

declive progresivo que puede ser explicado a partir del desmonte de estas estructuras paraestatales a partir del 2002 bajo iniciativa del gobierno Uribe.

**Grafico 3**  
**Combates Paramilitares - Guerrilla**

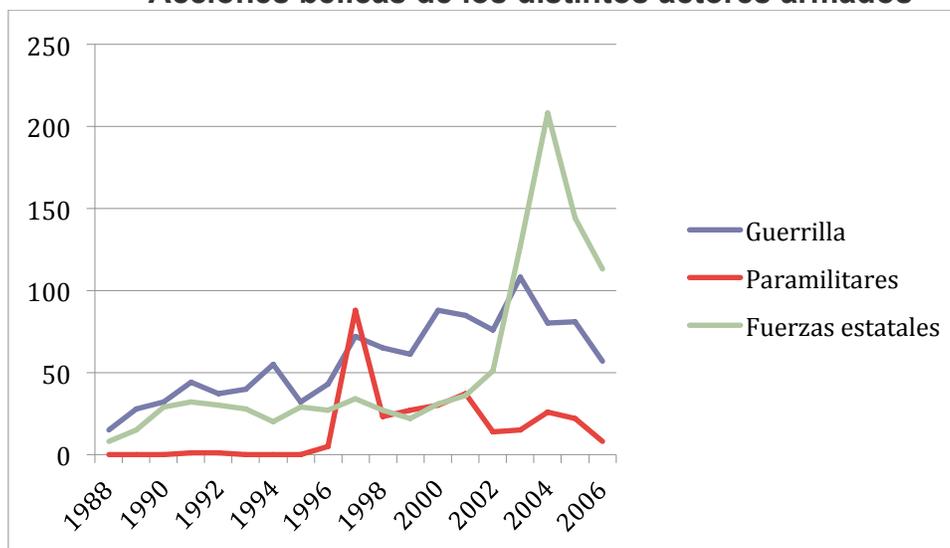


Ahora bien, de manera paralela a la ofensiva paramilitar se dieron también distintas oscilaciones en el conflicto gracias a las ofensivas desarrolladas por la insurgencia, así como por las fuerzas estatales. El gráfico 4 señala las oscilaciones que se han dado en el conflicto armado en Bolívar ante las distintas etapas que se han dado en el conflicto. La insurgencia, con una presencia predominante en la región, mantuvo una constante en su actuar armado hasta 1997, año de la incursión del paramilitarismo que escala el conflicto definitivamente suscitando una respuesta militar de la insurgencia. Por supuesto a partir del 2002 con la puesta en marcha del Plan Colombia en el Sur de Bolívar, las fuerzas estatales incrementan decididamente el número de acciones bélicas en el territorio, lo cual incidió negativamente en el actuar militar de la insurgencia en la región, así como del paramilitarismo. Por supuesto, hay que contar también con que a partir del 2002 el proceso de desmovilización del Bloque Central Bolívar de las AUC incidió negativamente en el actuar paramilitar, disminuyendo mínimamente su actuar bélico a pesar de una preeminente presencia de las fuerzas estatales en la región. Para 2009, se registraba presencia de grupos paramilitares

autodenominados Águilas Negras, así como de las Autodefensas Gaitanistas, que declaraban objetivo militar a toda iniciativa de organización social o de defensa de derechos, pero como afirman varios pobladores de la región, “están allí por el negocio del narcotráfico pero al que tengan que quitar del medio lo van a quitar”<sup>43</sup>. Como se puede ver en el gráfico 5 las acciones armadas que han emprendido las fuerzas estatales han tenido como objetivo la lucha contra insurgente, no así contra el paramilitarismo.

**Gráfico 4**

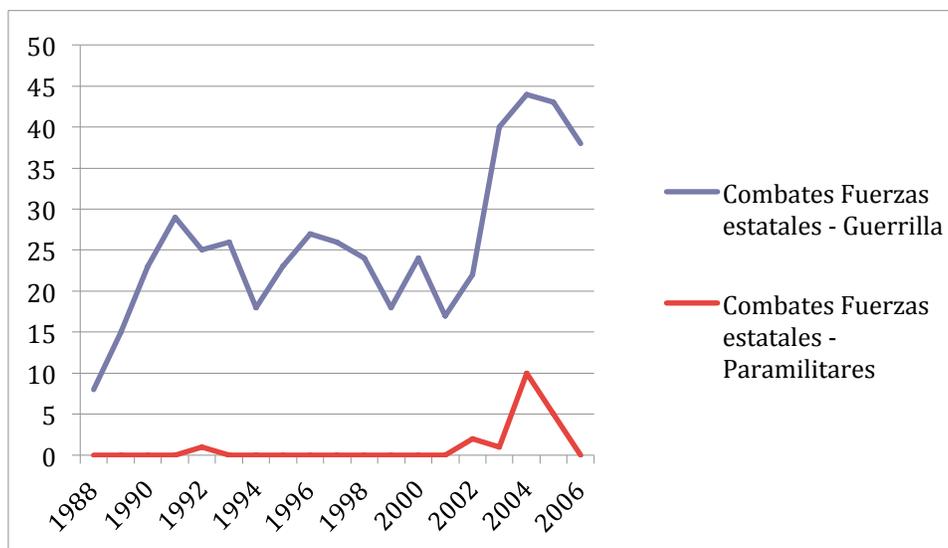
**Acciones bélicas de los distintos actores armados**



<sup>43</sup> Avanza el Paramilitarismo en el Sur de Bolívar, Corporación Sembrar, Tomado de: <http://www.corporacionsembrar.org/?q=node/55>

**Gráfico 5**

**Combates F. Estatales - Guerrilla / F. Estatales – Paramilitarismo**



Ahora bien, ¿cómo incidieron estas lógicas de la violencia impulsadas por el paramilitarismo en el tránsito de identidades de los pobladores de la región? El país se paralizó en el año 2000 cuando centenares de pobladores del Sur de Bolívar bloquearon vías de tránsito nacional en oposición al despeje de la región para un eventual diálogo con el ELN. A la cabeza de estas movilizaciones se presentaban dos movimientos ciudadanos “No Al Despeje” y ASOCIPAZ, encabezados por Lincon Castillo y Celso Martínez, respectivamente. Para muchos, el surgimiento de estos movimientos era fruto de la intimidación que el paramilitarismo realizaba en la región, lo cual no cambiaba mucho las circunstancias pues en el pasado el ELN había ejercido influencia en la sociedad y la política local haciendo uso de los mismos métodos coercitivos. Sin embargo, el surgimiento de estos dos movimientos, así como de la alianza que llevaron a cabo con la política local, pues ASOCIPAZ agrupaba a 28 alcaldes de la región, revelaba una recomposición de las identidades políticas a partir de dos factores: primero, una transformación de la economía local, lo cual favoreció el surgimiento de nuevas elites en la región; segundo, el miedo imperante en la

población a que una vez despejado el territorio el ELN arremetiera contra aquellos que habían favorecido que el Sur de Bolívar se volviera zona de control del paramilitarismo. En el contexto del fracaso de las negociaciones del Cagüán, los pobladores se negaron a favorecer el despeje del Sur de Bolívar movidos por el miedo a retaliaciones por parte de la insurgencia. Efectivamente la incursión armada por parte del paramilitarismo significó la creación de unas alianzas que permitieron el uso de la violencia coercitiva de manera selectiva. Luego, el regreso de la insurgencia a una posición de control de la región dejaría a los pobladores desarmados y indefensos a la persecución que se emprendería.

El incremento sustancial del cultivo de narcóticos en la región, como lo señalamos ya, incidió notablemente en la recomposición de la sociedad regional. El campesino convertido en “raspachin”, junto con el comerciante local que se nutre de la venta de insumos legales e ilegales a los cultivos y laboratorios, transformó la sociedad local y la llevó a una alianza tácita con el paramilitarismo que se nutría también del tráfico de cocaína. En ese sentido, muchos habitantes que vivían del negocio del cultivo de coca expresaban su incertidumbre respecto a sus cultivos una vez la región fuera centro de los intereses del gobierno nacional. Por supuesto acá las interpretaciones a la oposición al despeje han sido múltiples. Hay quienes sostienen que tanto ASOCIPAZ como “No al despeje”, son organizaciones manejadas por paramilitares, y que son solo juguetes útiles de dicha organización armada. Por lo menos así lo sugiere el Movimiento Nacional de Víctimas al señalar que muchos pobladores fueron obligados a marchar en contra del despeje so pena de ser “declarados enemigos”<sup>44</sup>. En el mismo sentido, Rodrigo Perez Alzate, alias “Julian Bolivar”, uno de los comandantes del BCB de las AUC, ha señalado que tanto ASOCIPAZ como “No al Despeje”, fueron creación del

---

<sup>44</sup> Disponible en: <http://movimientodevictimas.org/~nuncamas/images/stories/zona5/SURDEBOLIVAR.pdf>

paramilitarismo aunque obtuvieron después independencia<sup>45</sup>. Sin embargo, se trata más bien de la coincidencia de los intereses de los pobladores de la región con los intereses de las AUC, pues no quieren ver empoderado al ELN en la región antes de derrotarlos militarmente. Sin embargo más que una alianza táctica entre la población y el paramilitarismo lo que se evidenció fue el tránsito en las identidades políticas.

Habitando por décadas un territorio inhospito para la presencia estatal, los habitantes del sur de Bolívar históricamente solo encontraron con el paso del tiempo un respaldo en la insurgencia, que desde 1970 ejerce presencia en la región. Mientras el Estado solo hacia presencia a través de las Fuerzas Armadas sin realizar inversión social alguna, muchos habitantes encontraron en el ELN, que en desarrollo de su “agenda” fundaba pactos con los pobladores, una alianza optima para salir del atraso social. Así lo señala el presidente de ASOCIPAZ, Celso Martínez: “Yo les dí de comer a los guerrilleros, les di de beber, como yo creo lo hicimos todos. ¿Y al final qué? Nada. Sólo problemas. Sólo Muertos. La misma miseria”<sup>46</sup>. El desgaste progresivo de las relaciones con la insurgencia, y su autoritarismo como proselitismo armado, facilitó la incursión del paramilitarismo, que a través del asesinato selectivo minó las alianzas estratégicas que conservaba aún la insurgencia. Pero el paramilitarismo tampoco fue al parecer la opción definitiva. Los constantes éxodos de campesinos fuera de la región reclamando el respeto de los derechos humanos, así como una decidida lucha de parte del Estado contra el paramilitarismo, señalaron que las relaciones con el BCB nunca se fundaron del todo, y que los desmanes cometidos contra la población hicieron surgir un rechazo por parte de la población contra toda acción armada por parte de paramilitares o insurgencia. Así por lo menos se expresó con claridad una vez varios paramilitares asesinaron a Fidel Peña, un reconocido comerciante de San Pablo. El 8 de

---

<sup>45</sup> Disponible en: <http://www.verdadabierta.com/nunca-mas/1903-qnos-convertimos-en-una-maquina-de-matarq-julian-bolivar>

<sup>46</sup> Disponible en: <http://www.semana.com/nacion/resistencia/16537-3.aspx>

Marzo de 2004 cientos de habitantes del pueblo marcharon indignados contra el comando de policía, los sitios que frecuentaban los paramilitares y la casa del alcalde exigiendo el desmonte del paramilitarismo.

Al final, dentro de las declaraciones de los líderes del movimiento ASOCIPAZ, estaba la demanda de una presencia decidida del Estado y sus Fuerzas Militares, en rechazo a todo tipo de violencias tanto por parte de la insurgencia como del paramilitarismo. Afirmaba Carlos Julio Galvis, ejecutivo de ASOCIPAZ: “Lo que queremos es que se vayan ellos, las FARC, las AUC y que solo esté el Estado, nuestro Ejército Nacional”<sup>47</sup>.

Sin embargo cabe aún la pregunta por el aislamiento que tuvieron de ASOCIPAZ los distintos movimientos campesinos que históricamente habían hecho presencia en la región. Ni los miembros de la Mesa Permanente, ni las cooperativas mineras y campesinas del sur de Bolívar participaron activamente de este movimiento. Estos movimientos encontraron respaldo en organizaciones como el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, permaneciendo así de cierta manera neutrales al conflicto entre el ELN y el BCB.

---

<sup>47</sup> Disponible en: <http://www.semana.com/nacion/resistencia/16537-3.aspx>

## CONCLUSIONES

El conflicto armado en Colombia ha alcanzado con el paso del tiempo tal nivel de complejidad que la primera cuestión a la que se ve avocada cualquier investigación es la pregunta por la naturaleza del conflicto mismo. Efectivamente, a diferencia de otros conflictos armados en el mundo, en el conflicto armado en Colombia no subyace una disputa entre identidades culturales o raciales antagónicas, así como tampoco podemos interpretar la conflictiva realidad del país como una disputa ideológica, como se diera en pleno contexto de la guerra fría. Luego, ¿cómo concebir, a pesar de las múltiples transformaciones que ha tenido el conflicto armado en el país, la guerra que se ha dado y se libra aún entre los distintos actores armados? En esa dirección, y sin pretender una dilucidación de las causas del conflicto armado en el país, esta investigación ha valorado de manera positiva el concepto de “Guerra Civil”, desarrollado por Kalyvas, para describir la naturaleza del conflicto armado en Colombia. En la medida que dicho concepto describe la disputas armadas entre los distintos actores en pro de la constitución de soberanías específicas a través de la configuración de la lealtad de los pobladores, resulta válido no solo para entender el conflicto en el Sur de Bolívar sino también en muchas regiones del país que padecen condiciones similares. La historia de ocupación del territorio en el país privilegió la constitución de centros urbanos donde efectivamente el Estado hace presencia a partir de sus instituciones, no obstante muchas regiones como el Sur de Bolívar se ocuparon de manera muy tardía, y allí el Estado lejos de ser un actor hegemónico compite con otros actores sociales que también regentan el uso de las armas y la violencia. Efectivamente, constatamos que en el Sur de Bolívar, dadas sus peculiares condiciones históricas al ser una zona de colonización así como de ausentismo estatal,

el conflicto no debe ser interpretado como una anomalía de la política, sino como la práctica misma de politizar la realidad. Es decir, a pesar de que existen interpretaciones del conflicto armado en el país como una guerra que han emprendido un conjunto de actores contra la sociedad o el Estado, como se si tratara de una banda de forajidos que no han logrado ser asimilados por la realidad social y política del país, en este trabajo exploramos la riqueza analítica que tiene el concepto de “región en construcción”, en tanto zonas como el Sur de Bolívar se han constituido como territorios de disputa en los cuales compiten múltiples agendas. Luego, concebimos el conflicto armado no como una anomalía de la política, en el sentido que lo afirman quienes continuamente señalan que el monopolio de la violencia debe estar en el dominio del estado, haciendo aparecer el conflicto armado como una instancia externa a la política. En cambio, señalamos acá que la violencia no es un atributo exclusivo del Estado, sino una pretensión estatal en disputa entre los actores que compiten por darle significado a la realidad, por politizarla.

Luego, la reflexión que desarrollamos logró constatar que la violencia implementada por los actores armados, particularmente a partir de 1997 una vez incursiona el paramilitarismo en el Sur de Bolívar, al dirigirse de forma mayoritaria contra la población civil tiene un fuerte componente político. Es decir, la violencia implementada por los actores armados no buscaba como tal únicamente el combate con el ejército opositor, y mucho menos una simple ocupación del territorio. Quizás eso sucedería en una guerra convencional y regular en la cual las distinciones entre los ejércitos son claras, así como se diferencia al combatiente del civil. No obstante, la violencia coercitiva en el contexto de la guerra civil tiene la finalidad de destruir las redes que el ejército opositor ha consolidado con la población, para así consolidar las propias redes de lealtades y así forjar una suerte de soberanía específica. Luego, la identidad política no tiene un carácter a priori y fijo, como quien determina que existe un interés específico y puntual en los campesinos, y otro en los terratenientes, etc. La identidad política, como se evidenció a finales del siglo pasado en el Sur de Bolívar, posee un carácter fluctuante en tanto está sujeta a las variaciones que se dan en los equilibrios y

relaciones de poder en la región. Por eso, no es de extrañar que en un contexto de hegemonía de la insurgencia, contando con la presencia de organizaciones de inspiración contestataria, se diera el ambiente político preciso para que muchos campesinos y colonos de la región emprendieran movilizaciones de carácter contestatario y de protesta. Por supuesto, esta articulación de las relaciones de poder cambia una vez incursiona el paramilitarismo en la región, o se dan variaciones en la composición de la sociedad regional una vez aumentan los cultivos ilícitos y emerge una clase social integrada por la economía cocalera. Todo esto generará nuevas alianzas con las clases emergentes, que ya cercanas a los objetivos del paramilitarismo, promovieron en la población la oposición a la mesa de diálogo entre el ELN y el Gobierno.

En ese sentido confirmamos que las movilizaciones en el Sur de Bolívar promovidas por ASOCIPAZ no son proporcionales al nivel de agravios que existe en la región. Se trató de un conjunto de movilizaciones que expresaron una recomposición de las relaciones de poder en la región, así como también expresaron la constitución de una nueva lealtad de la población hacia el paramilitarismo que disciplinó a los pobladores de la región a través de un uso coercitivo de la violencia. Ahora bien, la lealtad que expresó parte de la población con el paramilitarismo se trató más de una coincidencia de intereses, una oposición a la insurgencia, pues como se ve ya para el 2004, las relaciones con el paramilitarismo también estaban agotadas por el constante uso coercitivo de la violencia por parte de estos. En ese contexto, ante una presencia mucho más decidida por parte del Estado a través de la Operación Bolívar, los grupos que aparecían en el pasado como aliados a los intereses del paramilitarismo en la oposición al despeje, demandaban ahora su independencia política de todo grupo armado ilegal, en consonancia con el Estado.

## ANEXO 1<sup>48</sup>

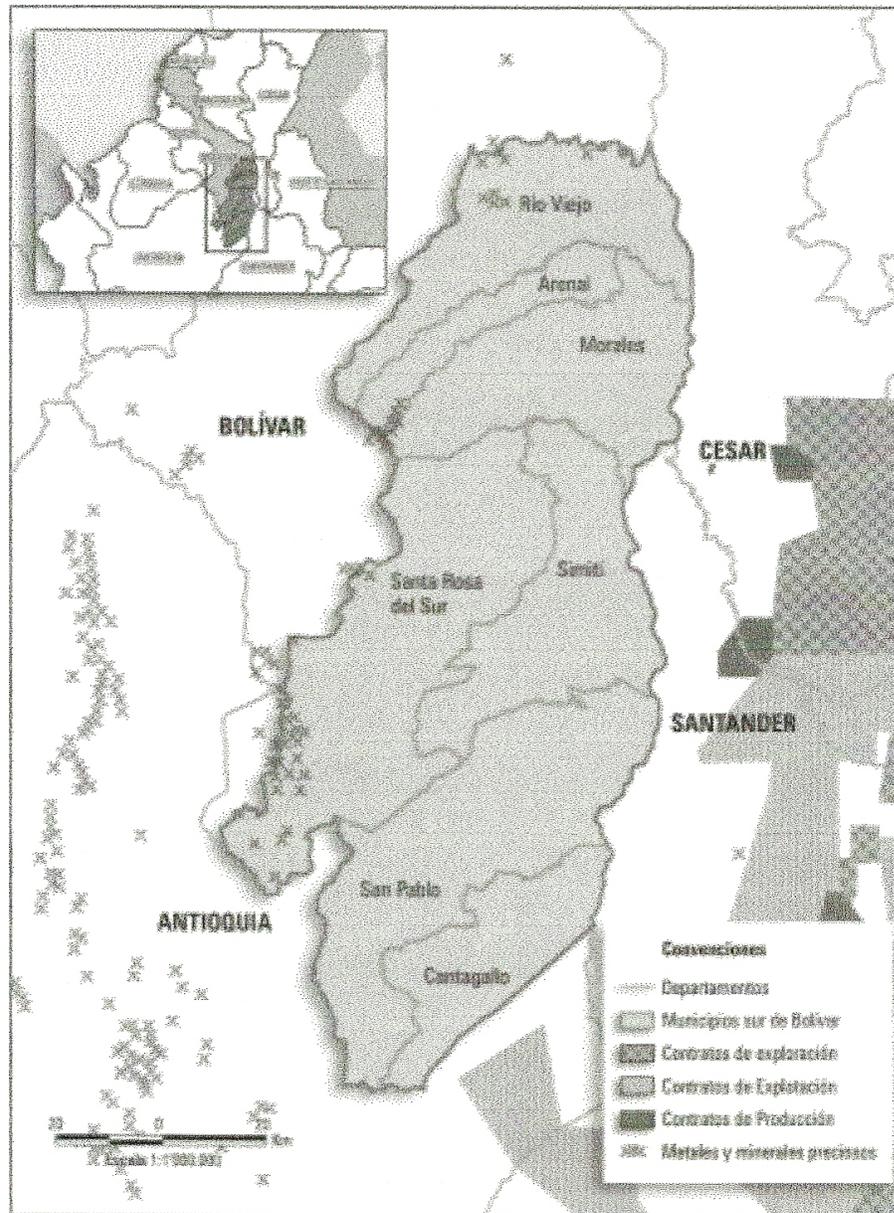
### División político-administrativa del Cono Sur de Bolívar



<sup>48</sup> Tomado de <http://www.opi.org.co/Cartografia/18.jpg> Consultado el 14 de Noviembre de 2011

## ANEXO 2

### Zonas Mineras en el Sur de Bolívar



Tomado de: Fonseca, et al, 2005.

# ANEXO 3

## Red Departamental de Carreteras del Departamento de Bolívar

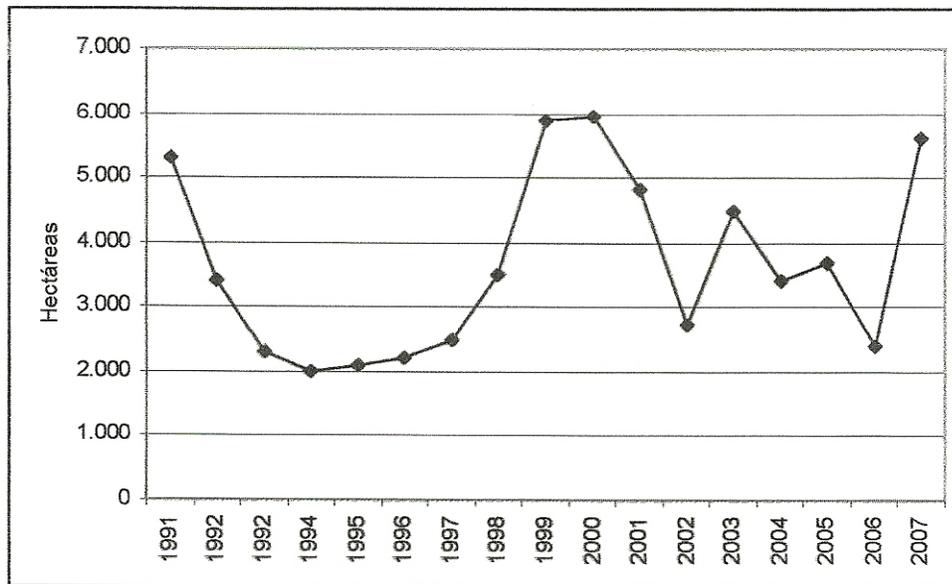


Fuente: Inviás, Gobernación de Bolívar

## ANEXO 4

### Grafico 1

#### Evolución de los cultivos de coca en el Sur de Bolívar, 1991-2007<sup>49</sup>



<sup>49</sup> Tomado de Fonseca, Gutiérrez y Rudqvist, (2004), en Vilorio (2009, 46).

## BIBLIOGRAFIA

- ARIAS, ANGÉLICA, “Contexto del Conflicto Armado”, en *Monografía Político Electoral Departamento de Bolívar 1997-2007*, Versión electrónica disponible en: Y refundaron la patria...., Edición de Claudia López, Random House Mondadori, Bogotá, 2010.
- BADIE, BERTRAND, “La expresión política comparada”, en *Política Comparada*, Fondo de Cultura Económica, Traducción de Mercedes Córdoba, México, 1993
- BENAVIDES, CARLOS ALBERTO, *Movilización regional y sujetos regionales. Una reflexión a partir de la experiencia de movilización de los pobladores del sur de Bolívar*, Ponencia presentada en el seminario ¿Quiénes somos los Campesinos hoy? Diálogos en torno a la antropología y los estudios rurales en Colombia, XII Congreso de Antropología en Colombia, Bogotá 2007. Disponible en: [http://www.icanh.gov.co/recursos\\_user/movilizacion%20regional.pdf](http://www.icanh.gov.co/recursos_user/movilizacion%20regional.pdf)
- BOLÍVAR, INGRID, “Transformaciones de la política: Movilización social. Atribución Causal y Configuración del Estado en el Magdalena Medio”, en *Conflictos, Poderes e Identidades en el Magdalena Medio 1990-2001*, Antropos, Cinep, Bogotá, 2006.
- COLLIER, PAUL, *Doing Well out of War*, 1999. Disponible en <http://siteresources.worldbank.org/INTKNOWLEDGEFORCHANGE/Resources/491519-1199818447826/28137.pdf>
- COMISIÓN DE ESTUDIOS SOBRE LA VIOLENCIA, *Colombia: violencia y democracia*, Universidad Nacional, Bogotá, 1987.
- DE ROUX, FRANCISCO, “El Magdalena Medio en el centro del conflicto y la esperanza”, en *Controversia* No174, Cinep, Bogotá, 1999, pp. 14-37.
- DUNCAN, GUSTAVO, “El Dinero no lo es Todo”, en *A la Sombra de la Guerra. Ilegalidad y Nuevos Ordenes regionales en Colombia*, Uniandes, CESO, Bogotá, 2009.
- ELN, “La paz y las causas del conflicto armado”, sin fecha ni referencia de edición.

- FONSECA, D. et al, *Cultivos de uso ilícito en el sur de Bolívar: aproximación desde la economía política*, PNUD-Asdi, Bogotá, 2005.
- GARZÓN, JUAN CARLOS, “La complejidad paramilitar: una aproximación estratégica”, ed. Alfredo Rangel, en *El Poder Paramilitar*, Planeta, 2005
- GARCÍA-DURÁN, MAURICIO, *El Conflicto Armado Colombiano: ¿El Fin del Fin?*, Cinep, 2008. Disponible en: <http://www.alboan.org/docs/articulos/canales/alboan/InformeCINEPsitu.pdf>
- GONZÁLEZ FERNÁN Y OTROS, *Violencia Política en Colombia*, Cinep, Bogotá, 2002
- GUTIÉRREZ LEMUS, Omar, la oposición regional a las negociaciones con el ELN, en *Análisis Político* N. 52, Bogotá, Sep-Dic de 2004.
- HARNECKER, MARTA, *ELN: Unidad que Multiplica*, 1988, Disponible en: <http://www.rebellion.org/docs/90192.pdf>
- KALDOR, MARY, *El poder y la fuerza*, Tusquets, Barcelona, 2010.
- KALYVAS, STATHIS, *La lógica de la violencia en la guerra Civil*, Madrid, 2010
- KALYVAS, STATHIS, *The Logic of Violence in a Civil War*, Cambridge, 2006.
- KALYVAS, STATHIS, *Esbozo de una teoría de la violencia en medio de la guerra civil*, en *Análisis Político* No42, Universidad Nacional, Enero-Abril 2001.
- KALYVAS, STATHIS, “Paramilitarismo: una perspectiva teórica”, en *El Poder Paramilitar*, Planeta, Bogotá, 2005.
- KRIESBERG, LOUIS, *Constructive Conflicts*, Third Edition, Rowman & Littlefield Publishers, 2007
- MADARIAGA, PATRICIA, “Región, Actores y Conflicto: los episodios”, en *Conflictos, Poderes e Identidades en el Magdalena Medio 1990-2001*, Antropos, Cinep, Bogotá, 2006.
- MOVIMIENTO NACIONAL DE VÍCTIMAS, *Riquezas Naturales y Miseria Social. Crímenes de Lesa Humanidad en el Sur de Bolívar 1966-2001*, Disponible en: <http://movimientodevictimas.org/~nuncamas/images/stories/zona5/SURDEBOLIVAR.pdf>
- NAEF, WERNER, *La idea del Estado en la edad Moderna*, Editorial Comares, 2005

- Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH, “Panorama Actual de Bolívar”, 2008. Disponible en: [http://www.derechoshumanos.gov.co/Observatorio/Publicaciones/documents/2010/Estu\\_Regionales/bolivar05.pdf](http://www.derechoshumanos.gov.co/Observatorio/Publicaciones/documents/2010/Estu_Regionales/bolivar05.pdf)
- PÉCAUT, DANIEL, Crónicas de dos décadas de política colombiana, Editorial Siglo XXI, Bogotá, 1988
- PÉCAUT, DANIEL, Las Farc ¿Una guerrilla sin fin o sin fines?, Norma, Bogotá, 2008.
- PEÑATE, ANDRÉS, *El sendero estratégico del ELN: del idealismo guevarista al clientelismo armado*, Documento de trabajo No15, Paz Pública, Programa de Estudios sobre Seguridad, Justicia y Violencia, Universidad de los Andes, Marzo de 1998.
- PIZARRO LEONGÓMEZ, Eduardo, Una Democracia Asediada, Norma, Bogotá, 2004.
- PIZARRO LEONGÓMEZ, Eduardo, Insurgencia sin revolución. La guerrilla en Colombia en una perspectiva comparada, Tercer Mundo, IEPRI-Universidad Nacional, 1996.
- PRADA, ESMERALDA, “Las luchas campesinas en el Magdalena Medio 1990-2001”, en Conflictos, Poderes e Identidades en el Magdalena Medio 1990-2001, Antropos, Cinep, Bogotá, 2006.
- REYES POSADA, ALEJANDRO, *Guerreros y Campesinos: el despojo de la tierra en Colombia*, Norma, Bogotá, 2009.
- ROMERO, MAURICIO, Paramilitares y Autodefensas, Planeta, 2003, Bogotá.
- ROMERO, MAURICIO, “Identidades políticas, intervención estatal y paramilitares. El caso del Departamento de Córdoba”, en Controversia No.173, Dic 1998, Bogotá.
- RUBIO, MAURICIO, “Rebeldes y criminales. Una crítica a la tradicional distinción entre el delito político y el delito común”, en JAIME AROCHA, FERNANDO CUBIDES Y MYRIAM JIMENO, *Las violencias: inclusión creciente*, Facultad de Ciencias Humanas y Centro de estudios Sociales, (CES), Universidad Nacional, Bogotá.
- SALGADO R., HENRY, *Los Actores Armados y sus planteamientos frente al tema agrario y al narcotráfico*, Revista Controversia, Número 180, diciembre de 2002.

- SANDOVAL, CARLOS, Investigación *cualitativa*, ICFES, Bogotá, 1996.
- TARROW, SIDNEY, “El poder en movimiento. Los Movimientos Sociales, la Acción Colectiva, y la Política”, Alianza, Traducción de Herminia Bavia, Madrid, 1997.
- VARGAS, ANDRÉS, “Guerra civil en Colombia: el caso de Barrancabermeja”, en *Guerra y Violencias en Colombia*, Cerac- Universidad Javeriana, Bogotá, 2009.
- VÁZQUEZ, TEÓFILO, “Dinámicas, tendencias e interacciones de los actores armados en el Magdalena Medio, 1990-2001”, en *Conflictos, poderes e identidades en el Magdalena Medio*, Cinep, Antropos, Bogotá, 2006.
- VILORIA DE LA HOZ, JOAQUÍN, Economía y conflicto en el Cono Sur del Departamento de Bolívar, Cartagena de Indias, 2009 Disponible en: <http://www.banrep.gov.co/documentos/publicaciones/regional/documentos/DTSER-110.pdf>